REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. III Núm. 2 (2012): 1 – 62
- Crònica -

EL DERECHO AMBIENTAL EN CATALUÑA (pp. 2-32)

—

EL DRET AMBIENTAL A CATALUNYA (pp. 33-61)

LUCÍA CASADO CASADO

Profesora titular de Derecho Administrativo / Professora titular de Dret Administratiu

Universitat Rovira i Virgili

—

Investigadora

Centre d'Estudis de Dret Ambiental de Tarragona

Sumario. 1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña. 1.1. El Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente. A. Modificaciones del texto refundido de la Ley de Aguas. B. Modificaciones de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. C. Modificaciones de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. D. Modificación de la Ley del Mercado de Valores. 1.2. El nuevo marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. 1.3. Novedades en materia de aguas. 1.4. Novedades en materia de residuos. 1.5. Novedades en materia de ruido. 1.6. Novedades en materia de acceso a la información ambiental. 1.7. Novedades de carácter organizativo. 1.8. Otras normas de interés. 2. Derecho y políticas ambientales autonómicas. 2.1. La escasa actividad normativa autonómica. 2.2. El Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020.

1. Derecho estatal de aplicación en Cataluña

La actividad normativa desarrollada por el Estado durante el período objeto de análisis (del 1 de mayo al 15 de octubre de 2012) ha sido amplia y han visto la luz un buen número de normas en materia ambiental, todas ellas provenientes de la acción normativa del Gobierno. Se trata, además, de las primeras normas en materia ambiental que se aprueban por el nuevo Gobierno del Partido Popular tras su victoria en las urnas, si exceptuamos las relativas a la reestructuración organizativa de las competencias ambientales, de las que se daba cuenta en la crónica anterior.

En estos meses no se ha aprobado ninguna nueva ley en materia de protección del medio ambiente, cuestión lógica, por otro lado, si tenemos en cuenta los pocos meses que han transcurrido desde el inicio de la nueva legislatura. Sin embargo, sí se han introducido modificaciones importantes en preceptos concretos de otras normas con rango de ley previas, como el texto refundido de la Ley de Aguas (en adelante, TRLA), la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad o la Ley de Residuos y Suelos Contaminados. El instrumento elegido a estos efectos ha sido el decreto-ley, por lo que la materia ambiental tampoco escapa a una tendencia bastante generalizada en los últimos tiempos de intensa utilización de esta figura para la adopción de medidas ante la situación de grave crisis económica que padece nuestro país, aun cuando la utilización del decreto-ley solo está prevista con carácter excepcional en la Constitución "en caso de extraordinaria y urgente necesidad". Entre los muchos paquetes de medidas contra la crisis que hemos visto periódicamente publicarse en el BOE, se encuentra el de medidas urgentes en materia de medio ambiente, adoptado mediante el Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, y justificado por la necesidad de simplificación y agilización administrativa y racionalización del marco jurídico actual, con el fin de contribuir a la reactivación de la economía y la generación de empleo. De nuevo, cambios en la legislación ambiental justificados por la crisis económica, tendencia en alza en estos momentos.

Asimismo, como viene siendo habitual, se han aprobado varias normas reglamentarias en ámbitos sectoriales diversos (aguas, ruido, residuos…), aunque tampoco en la mayor parte de casos se trata propiamente de nuevos reglamentos, sino de modificaciones de los ya existentes justificadas por motivos diversos. También debe mencionarse el Auto de 28 de marzo de 2012, de la Sala Tercera (Sección 3.ª) del Tribunal Supremo, por el que se decreta la suspensión de la vigencia del Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre, por el que se regula el listado y catálogo español de especies exóticas invasoras, en lo que se refiere a la inclusión de las especies salvelino (*Salvelinus fontinalis*) y perca americana o *black bass* (*Micropterus salmoides*) en el anexo I (Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras) y de las especies trucha arcoíris (*Oncorhynchus mykiss*) y hucho (*Hucho hucho*) en el anexo II (Listado de Especies Exóticas con Potencial Invasor) del citado Real Decreto, en el marco de la pieza separada de medidas cautelares dimanante del recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Federación Española de Pesca y Casting[1].

A nivel internacional, destaca la entrada en vigor del Acuerdo entre España y el Principado de Andorra sobre el traslado de residuos, hecho en Madrid el 29 de noviembre de 2011.

Por otro lado, en relación con los recursos de inconstitucionalidad presentados por el presidente del Gobierno contra determinados incisos del anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 6/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, y del anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, de Declaración del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, de los que se daba cuenta en la crónica anterior, el Tribunal Constitucional ha acordado levantar la suspensión que se produjo con la admisión de dichos recursos, mediante sendos autos de 8 de mayo de 2012, a excepción del inciso 36 del apartado 2.2.4 del anejo 2 de la Ley de Castilla-La Mancha 5/2011, de 10 de marzo, respecto al cual sí que se mantiene la suspensión[2]. En este período también se ha planteado una cuestión de inconstitucionalidad en relación con la supuesta inconstitucionalidad de la Ley de las Cortes de Castilla y León 2/2008, de 17 de junio, de Declaración del Proyecto Regional para la instalación de un centro de tratamiento de residuos industriales no peligrosos en el término municipal de Fresno de la Ribera, por posible vulneración de los artículos

[1] BOE núm. 153, de 27 de junio de 2012. Corrección de errores en BOE núm. 160, de 5 de julio de 2012.

[2] Vid. BOE núm. 121, de 21 de mayo de 2012.

9.3, 24.1, en relación con el artículo 117, en su vertiente de derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales, y 149.1.23 de la CE, en relación con el artículo 5.4 de la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos[3].

Por último, en este período también han iniciado su tramitación parlamentaria diferentes proyectos de ley de interés en materia ambiental: el de medidas fiscales para la sostenibilidad energética[4]; el de declaración como parque nacional de las Cumbres de la Sierra del Guadarrama[5]; y el de protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley de Costas[6], que introducirá novedades importantes en este ámbito. Y se han anunciado modificaciones por el Gobierno, en un futuro próximo, de otras normas ambientales como las relativas a la responsabilidad medioambiental, con el fin de reducir cargas administrativas y simplificar procedimientos, o las relativas al desarrollo sostenible del medio rural, para hacer operativa la ley y poderla aplicar en todas las comunidades autónomas.

1.1. El Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente

Como avanzábamos, la norma más importante en materia ambiental dictada en el período objeto de examen es el Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente[7]. De este modo, la materia ambiental es objeto de atención en uno de los numerosos paquetes de medidas que con carácter urgente y utilizando la figura del decreto-ley ha venido aprobando en los últimos meses el Consejo de Ministros. A través de esta norma se acomete la reforma parcial de tres normas con rango de ley de gran importancia en materia ambiental: el TRLA, la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, y la Ley de Residuos y Suelos Contaminados, aunque también se modifica una ley no ambiental, la Ley del Mercado de Valores, para realizar algunos ajustes en materia de comercio de derechos de emisión.

[3] BOE núm. 164, de 10 de julio de 2012.

[4] BOCG. Congreso de los Diputados, núm. A-25-1, de 28 de septiembre de 2012.

[5] BOCG. Congreso de los Diputados, núm. A-22-1, de 14 de septiembre de 2012.

[6] BOCG. Congreso de los Diputados, núm. A-29-1, de 19 de octubre de 2012.

[7] Vid. también la Resolución de 17 de mayo de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 17/2012, de 4 de mayo, de Medidas Urgentes en materia de Medio Ambiente. BOE núm. 125, de 25 de mayo de 2012.

Se trata de una norma que ha suscitado un buen número de críticas por parte de las asociaciones ecologistas tanto por el instrumento elegido para emprender estas reformas legislativas y la merma de la participación pública que ha supuesto como por el propio contenido de algunas de las medidas adoptadas (especialmente en materia de residuos). Esta norma se justifica en el preámbulo por el actual contexto económico: "En una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo, sin merma del principio de protección". Partiendo de esta premisa, la reforma "se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones públicas". Por ello, la simplificación y agilización administrativa de las normas ambientales y la necesidad de que estas normas sean claras y sencillas, junto a argumentos de índole económica, se convierten en elementos justificadores de la reforma. Incluso llega a afirmarse en el preámbulo que "la legislación ambiental también debe ser sostenible".

En cuanto a los títulos competenciales que le sirven de fundamento, el artículo 1, que modifica el TRLA, se dicta al amparo de la competencia atribuida al Estado por el artículo 149.1.22 CE para los apartados uno, nueve y diez, 149.1.13 CE para los apartados dos, ocho y once, y 149.1.18 CE para los apartados tres a seis y doce y trece; el artículo 4, por el que se modifica la Ley del Mercado de Valores, se dicta al amparo de lo dispuesto en las reglas 6, 11 y 13 del artículo 149.1 CE; y la disposición transitoria única se dicta al amparo de la habilitación contenida en la cláusula 13 del artículo 149.1 CE, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica[8].

A. Modificaciones del texto refundido de la Ley de Aguas

En el ámbito de las aguas, el Real Decreto-Ley 17/2012 ha introducido importantes modificaciones en el TRLA, con el fin de "conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio

[8] Vid. la disposición final primera del Real Decreto-Ley 17/2012.

fundamental el de unidad de gestión de cuenca". Entre ellas, destacamos en primer lugar algunas novedades en el régimen jurídico de las aguas subterráneas. Con la finalidad de racionalizar la gestión y el uso del agua, en línea con la Directiva Marco del Agua, se regulan las masas de agua subterránea y el buen estado de estas. Así, se sustituye el concepto de "acuífero sobreexplotado" por el de "masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico", para adecuar la terminología del TRLA a la Directiva Marco; se suprime la posibilidad anteriormente prevista de otorgar concesiones de aguas subterráneas en los acuíferos declarados sobreexplotados o en riesgo de estarlo, solo en circunstancias de sequía previamente constatadas y de acuerdo con el Plan de Ordenación para la Recuperación del Acuífero (derogación del apartado primero de la disposición adicional séptima); se elimina el dictamen preceptivo del Consejo del Agua para que la Junta de Gobierno de los organismos de cuenca declare una masa de agua en riesgo de no alcanzar un buen estado cuantitativo o químico; y se modifican algunos aspectos del régimen de protección de las aguas subterráneas, entre los que destacan la introducción de novedades en el contenido de los programas de actuación para su recuperación (podrán prever la aportación de recursos externos a la masa de agua subterránea, y, en ese caso, el programa de actuación incluirá los criterios para la explotación conjunta de los recursos existentes en la masa y de los externos; fijar la delimitación y condiciones de los perímetros de protección de las masas de agua subterránea en los que sea necesaria su autorización para realizar obras de infraestructura, extracción de áridos y otras actividades e instalaciones que puedan afectarla, que vincularán a las administraciones públicas competentes en la ordenación del territorio y urbanismo en cuanto a la elaboración de los instrumentos de planificación y al otorgamiento de las licencias; y contemplar las condiciones en las que temporalmente se podrán superar las limitaciones establecidas, permitiendo así extracciones superiores a los recursos disponibles de una masa de agua subterránea, siempre que el cumplimiento de los objetivos medioambientales esté garantizado) y en el procedimiento para su aprobación (se prevé la posibilidad de adoptar hasta su aprobación, junto con las medidas cautelares, medidas de protección de la calidad de las aguas y se elimina la necesidad de consulta preceptiva al Consejo del Agua), así como una mayor flexibilidad en la aplicación de tales programas (cuando se mejore el estado de la masa de agua subterránea como consecuencia de la aplicación del programa de actuación, el organismo de cuenca, de oficio o a instancia de parte, podrá reducir progresivamente las limitaciones del programa y aumentar, de forma proporcional y

equitativa, el volumen que se puede utilizar, siempre que no se ponga en riesgo la permanencia de los objetivos generales ambientales).

En segundo lugar, se introduce una nueva disposición adicional decimocuarta en el TRLA, con el fin de regular la cesión de derechos en el ámbito del Plan Especial del Alto Guadiana, cuya aplicación urgente impida un nuevo deterioro del acuífero y permita mantener la sostenibilidad de las instalaciones agrícolas derivadas y una reordenación de los derechos de uso de las aguas tendente a la recuperación ambiental de los acuíferos. Para ello, se flexibilizan los requisitos necesarios para la cesión previstos con carácter general en el TRLA (no es necesario que la cesión se realice a otro concesionario o titular de derecho de igual o mayor rango según el orden de preferencia establecido por el Plan Hidrológico de la Cuenca ni que el volumen de agua cedido no supere al realmente utilizado por el cedente), aunque cuando el uso al que se destine el agua sea el regadío, no se podrá incrementar la superficie que ya tuviera reconocida el cesionario. Como novedad, la cesión de aprovechamientos de aguas no se realizará con carácter temporal, sino "de forma irreversible y en su totalidad". Por ello, el organismo de cuenca otorgará al cesionario la correspondiente concesión (en la que el volumen de agua concedido será un porcentaje del volumen objeto de transmisión, que se determinará en atención a las condiciones técnicas y ambientales que concurran y, en su caso, estará vinculado al programa de actuación para la recuperación del buen estado de la masa de agua) hasta el 31 de diciembre de 2035[9].

En tercer lugar, se incluyen medidas para incentivar, como mecanismo potestativo, la transformación de los derechos de aprovechamiento privados de aguas en derechos concesionales, con el objetivo, entre otros, de facilitar y mejorar la gestión de episodios meteorológicos e hidrológicos desfavorables. Con esta finalidad, se introducen dos nuevas disposiciones transitorias en el TRLA: la tercera bis, con el título de "Disposiciones comunes a la aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitorias segunda y tercera", y la décima, con el título de "Transformación de

[9] POVEDA GÓMEZ, P. y LOZANO CUTANDA, B., "Medidas urgentes en materia de medio ambiente (Real Decreto-Ley 17/2012)", *Diario La Ley*, núm. 7858, 2012, ponen de manifiesto lo siguiente: "En realidad, el Real Decreto Ley está admitiendo la posibilidad de una transmisión íntegra de la concesión, pero al ser consciente de que dicha transmisión requiere una modificación del título concesional —en la medida que el aprovechamiento objeto de transmisión va a permitir utilizar el recurso para otros usos o para terrenos distintos de los previstos en la concesión original—, se ve obligado a admitir la necesidad del otorgamiento de una nueva concesión, que determinará los nuevos usos o el terreno al cual se va a aplicar (en caso de concesiones de riego), en sustitución de la concesión originaria que es objeto de transmisión, pero que dejará de tener eficacia jurídica como consecuencia de la cesión acordada".

derechos privados en concesionales". La primera de ellas prevé que, a los efectos de aplicación del apartado tercero de las disposiciones transitorias segunda y tercera, se considerará modificación de las condiciones o del régimen de aprovechamiento, entre otras, "las actuaciones que supongan la variación de la profundidad, diámetro o localización del pozo, así como cualquier cambio en el uso, ubicación o variación de superficie sobre la que se aplica el recurso en el caso de aprovechamiento de regadío". Además, la concesión a que se refieren estas disposiciones transitorias se otorgará, a instancia de parte, sin procedimiento de competencia de proyectos y el plazo no será inferior al establecido en su inscripción en la sección C del Registro de Aguas, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión.

Con arreglo a la nueva disposición transitoria décima, los titulares de aprovechamientos de aguas inscritos en el Catálogo de Aguas Privadas de la cuenca a que se refiere la disposición transitoria cuarta podrán solicitar en cualquier momento la inscripción en el Registro de Aguas de la cuenca, para lo que instarán el otorgamiento de la correspondiente concesión. En estos casos, el otorgamiento de la concesión se llevará a cabo sin competencia de proyectos y el término de la concesión será el 31 de diciembre de 2035, teniendo preferencia en ese momento el concesionario para obtener una nueva concesión. No obstante, cuando la solicitud de concesión se refiera a masas de agua subterránea declaradas en riesgo de no alcanzar un buen estado y que cuenten con el programa de actuación a que se refiere el artículo 56, la concesión estará sometida a las limitaciones establecidas en dicho programa. Cuando no exista un programa de actuación aprobado, no se podrá instar la transformación del derecho.

En cuarto lugar, se pone fin a la tan criticada cesión mediante decreto-ley de las competencias estatales en materia de aguas operada por el Real Decreto-Ley 12/2012, que introdujo un nuevo apartado uno a la disposición adicional séptima del TRLA, ahora derogado, que habilitaba para el ejercicio de facultades de policía del dominio público hidráulico en las cuencas intercomunitarias, así como para la tramitación de los procedimientos a que dieran lugar sus actuaciones hasta la propuesta de resolución, a las comunidades autónomas que hubieran asumido en sus estatutos la competencia ejecutiva sobre estas facultades. La finalidad de este cambio es "evitar que con esta reforma legal pueda verse afectado el principio de unidad de gestión de las cuencas hidrográficas intercomunitarias, elevado a principio constitucional por el Tribunal Constitucional en sus sentencias 227/1988, 161/1996 y 30 y 32/2011. Y salir al paso de

los desarrollos normativos que sobre esta materia hayan realizado o puedan realizar las Comunidades Autónomas habilitadas por esa disposición adicional"[10].

En quinto lugar, por lo que respecta al régimen económico-financiero del dominio público hidráulico, se modifican los apartados 1 y 3 del artículo 111.bis ("Principios generales del régimen económico-financiero de la utilización del dominio público hidráulico"). Por una parte, con arreglo a la nueva redacción del apartado 1, las administraciones públicas establecerán, en virtud del principio de recuperación de costes y teniendo en cuenta proyecciones económicas a largo plazo, los mecanismos oportunos para repercutir los costes de los servicios relacionados con la gestión del agua, incluyendo los costes ambientales y del recurso, en los diferentes usuarios finales. Por otra, con la modificación del apartado 3, se establece la posibilidad de que la Administración competente pueda excepcionar motivadamente el citado principio de recuperación de costes para determinados usos siempre que no se comprometan los fines y el logro de los objetivos ambientales.

Por último, en materia sancionadora, tras la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 4 de noviembre de 2011, que declaró la nulidad parcial de la Orden MAM/85/2008, de 16 de enero, por la que se establecen los criterios técnicos para la valoración de los daños al dominio público hidráulico y las normas sobre toma de muestras y análisis de vertidos de aguas residuales, se modifica el artículo 117 del TRLA para incorporar, sin perjuicio del ulterior desarrollo reglamentario, los criterios generales que se tomarán en cuenta en la valoración del daño causado en el dominio público hidráulico, determinantes para calificar la infracción. Se pretende con ello garantizar "el ejercicio de la potestad sancionadora con pleno respeto al principio de legalidad (artículo 25 de la Constitución), en su doble vertiente de reserva legal y tipicidad"[11].

B. Modificaciones de la Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad

En materia de patrimonio natural y biodiversidad, dos son las modificaciones más destacables. Por una parte, se prevé la coordinación de los regímenes jurídicos de protección de los distintos espacios naturales protegidos cuando confluyan sobre un

[10] Vid. el preámbulo del Real Decreto-Ley 17/2012, párrafo undécimo.

[11] Vid. el preámbulo del Real Decreto-Ley 17/2012, párrafo décimo.

mismo espacio. Para ello, se modifica el apartado 2 del artículo 28 de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad y se prevé que si se solapan en un mismo lugar distintas figuras de espacios protegidos, las normas reguladoras de estos, así como los mecanismos de planificación, "deberán ser coordinados para unificarse en un único documento integrado, al objeto de que los diferentes regímenes aplicables en función de cada categoría conformen un todo coherente".

Por otra, respecto de las zonas especiales de conservación y las zonas de especial protección para las aves, las comunidades autónomas fijarán las medidas de conservación necesarias que respondan a las exigencias ecológicas de los tipos de hábitats naturales y de las especies presentes en tales áreas, que implicarán, entre otras medidas, planes e instrumentos de gestión adecuados. La novedad es que ahora estos planes "deberán tener en especial consideración las necesidades de aquellos municipios incluidos en su totalidad o en un gran porcentaje de su territorio en estos lugares" [nuevo art. 45.1.a)].

C. Modificaciones de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados

El Real Decreto-Ley 17/2012 también introduce algunas modificaciones en la Ley 22/2011, de 28 de julio, de Residuos y Suelos Contaminados, "con la finalidad de simplificar y reducir las cargas administrativas que ocasionaban ambigüedad, incertidumbre e inseguridad en la aplicación de la norma" y también "para eliminar la indeterminación e inseguridad jurídica"[12]. Entre estas modificaciones destaca, en materia de reutilización, reciclado y valorización de residuos, la previsión de que las medidas de fomento que pueden adoptar las autoridades ambientales —en su respectivo ámbito competencial y en atención a los principios de prevención y fomento de la reutilización y el reciclado de alta calidad— tendrán también como finalidad, además del fomento de la reutilización de los productos y de las actividades de preparación para la reutilización, el fomento del reciclado (nueva redacción del apartado 1 del artículo 21).

Con relación a los sistemas de depósito, devolución y retorno, se suprime la posibilidad, anteriormente establecida de forma expresa, de adoptar medidas destinadas a facilitar la

[12] Preámbulo del Real Decreto-Ley 17/2012, párrafo cuarto.

implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno para determinados envases y productos reutilizables, teniendo en cuenta la viabilidad técnica y económica de estos sistemas, los impactos ambientales, sociales, etc. (supresión del apartado 2 del artículo 21). Esta modificación se complementa con la que se introduce en los artículos 31.2.d) y 31.3. En el primero de estos preceptos, que incluía la posibilidad de obligar a los productores de los productos que con el uso se convierten en residuos a establecer un sistema de depósito, devolución y retorno que permitiera la devolución de las cantidades depositadas y el retorno del producto para su reutilización o del residuo para su tratamiento, ahora se puntualiza que este sistema solo podrá establecerse "en los casos de residuos de difícil valorización o eliminación, de productos o residuos cuyas características determinen que estos sistemas sean la opción más adecuada para su correcta gestión o cuando no se cumplan los objetivos de gestión fijados en la normativa vigente". Y en el nuevo artículo 31.3 se prevé que la implantación de sistemas de depósito, devolución y retorno de residuos se establecerá con carácter voluntario, con el límite de los supuestos contemplados en el artículo 31.2.d).

En cuanto al régimen de los traslados de residuos en el interior del territorio del Estado, se modifica el artículo 25 de la Ley para establecer que las notificaciones previas a las autoridades competentes de la comunidad autónoma de origen y de la de destino realizadas por los operadores que vayan a llevar a cabo un traslado de residuos "podrán ser generales con la duración temporal que se determine reglamentariamente o podrán referirse a traslados concretos".

También se incluyen algunas modificaciones en relación con los sistemas colectivos de gestión. Así, se modifica el apartado 3 del artículo 32 con el fin de someter los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor únicamente a la autorización concedida en la comunidad autónoma donde tenga previsto establecer su sede social, autorización que será válida para todo el territorio nacional y se inscribirá en el Registro de Producción y Gestión de Residuos[13]. De este modo, se suprime la necesidad de obtener autorizaciones del resto de las comunidades autónomas en las que el sistema tuviese previsto actuar, que anteriormente sí resultaban exigibles. La participación de las comunidades autónomas distintas de aquella en la que el sistema colectivo tenga su sede social se garantiza a través del informe preceptivo que, con carácter previo a la

[13] En relación con los sistemas colectivos de gestión, *vid.* también la nueva redacción que se da a la disposición transitoria cuarta y al apartado 7 del anexo X de la Ley 22/2011.

resolución autorizatoria de la comunidad autónoma, ha de emitir la Comisión de Coordinación en materia de residuos, órgano colegiado del que forman parte todas las comunidades autónomas, junto a representantes del Estado y de las entidades locales. Esta comisión también podrá realizar el seguimiento del cumplimiento de las autorizaciones y de las condiciones de ejercicio.

Finalmente, en materia sancionadora se modifica el artículo 49.3 para clarificar que en los supuestos de abandono, vertido o eliminación incontrolados de los residuos cuya recogida y gestión corresponde a las entidades locales, así como en el de su entrega sin cumplir las condiciones previstas en las ordenanzas locales, la potestad sancionadora corresponderá a los titulares de las entidades locales.

D. Modificación de la Ley del Mercado de Valores

En materia de comercio de derechos de emisión, se añade una disposición adicional vigésimo primera en la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, que trae causa en el Reglamento (UE) n.º 1210/2011 de la Comisión, de 23 de noviembre de 2011, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1031/2010 de la Comisión, de 12 de noviembre de 2010, sobre el calendario, la gestión y otros aspectos de las subastas de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero con arreglo a la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. Son cuatro los aspectos más destacables de esta nueva disposición adicional. En primer lugar, permite que las empresas que prestan servicios de inversión y las entidades de crédito autorizadas a prestar servicios de inversión puedan presentar ofertas en nombre de sus clientes en las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que no sean instrumentos financieros, a que se refiere el Reglamento n.º 1031/2010. A tal fin, deberán incluir esta actividad en el programa de actividades a que se refiere el artículo 66 de la Ley, relativo a la autorización y el registro. En segundo lugar, otorga a la Comisión Nacional del Mercado de Valores la competencia para sancionar a las personas responsables del incumplimiento en nuestro territorio de los artículos 37 a 42 del Reglamento (UE) nº 1031/2010 en relación con las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que no sean instrumentos financieros celebradas en nuestro territorio o fuera de él. Para ello, contará con las facultades de supervisión e inspección. En tercer lugar, en materia sancionadora prevé la aplicación, en caso de incumplimiento de los artículos 37 a 42 del Reglamento (UE) n.º 1031/2010, del

régimen sancionador previsto en el capítulo II del título VIII de la Ley del Mercado de Valores en relación con las operaciones con información privilegiada o que puedan constituir manipulación de mercado, aunque determina algunas particularidades. Por último, cabe señalar que la Comisión Nacional del Mercado de Valores cooperará con otras autoridades competentes de la Unión Europea, con las plataformas de subastas y con la entidad supervisora de las subastas siempre que sea necesario para llevar a cabo las funciones establecidas en el Reglamento (UE) n.º 1031/2010 y en relación con las materias y en los términos que en dicho Reglamento se regulan.

1.2. El nuevo marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios

Recientemente se ha aprobado el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios. El Real Decreto, que desarrolla la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal y traspone al ordenamiento español la Directiva 2009/128/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se establece el marco de la actuación comunitaria para conseguir un uso sostenible de los plaguicidas —a excepción de lo que se refiere al artículo 8 y al anexo II—, se dicta al amparo del artículo 149.1, apartados 13, 16 y 23, de la CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de, respectivamente, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, bases y coordinación general de la sanidad, y legislación básica sobre protección del medio ambiente.

Su objeto es establecer el marco de acción para conseguir un uso sostenible de los productos fitosanitarios mediante la reducción de los riesgos y los efectos de su uso en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos, tales como los métodos no químicos; y la aplicación y el desarrollo reglamentario de ciertos preceptos relativos a la comercialización, la utilización y el uso racional y sostenible de los productos fitosanitarios, establecidos por la Ley 43/2002, de 20 de noviembre, de Sanidad Vegetal. En cuanto a su ámbito de aplicación, afecta tanto a los productos utilizados en las actividades agrarias como a los utilizados en otros ámbitos profesionales distintos.

Con el fin de dar cumplimiento a estos objetivos, se contemplan en esta norma

diferentes mecanismos conducentes a conseguir un uso más racional de los productos fitosanitarios. En primer lugar, se prevé la adopción por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, antes del 26 de noviembre de 2012, de un plan de acción nacional de uso sostenible de los productos fitosanitarios con el objetivo de reducir los riesgos y los efectos de la utilización de productos fitosanitarios en la salud humana y el medio ambiente, y fomentar el desarrollo y la introducción de la gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativos con objeto de reducir la dependencia del uso de productos fitosanitarios. En este plan se desarrollarán buena parte de las medidas que todas las administraciones públicas deberán poner en marcha para garantizar la sostenibilidad en el uso de los productos fitosanitarios.

En segundo lugar, se regula la gestión integrada de plagas, que se impone, en lo que se refiere a los usos agrarios, a partir del 1 de enero de 2014[14]. Esta gestión integrada consiste en el examen cuidadoso de todos los métodos de protección vegetal disponibles y posterior integración de medidas adecuadas para evitar el desarrollo de poblaciones de organismos nocivos y mantener el uso de productos fitosanitarios y otras formas de intervención en niveles que estén económica y ecológicamente justificados y que reduzcan o minimicen los riesgos para la salud humana y el medio ambiente. La gestión integrada de plagas pone énfasis en conseguir el desarrollo de cultivos sanos con la mínima alteración posible de los agroecosistemas y en promover los mecanismos naturales de control de plagas.

En tercer lugar, dentro de las medidas que contempla el Real Decreto y que deberán poner en marcha las administraciones públicas implicadas, se incluyen el establecimiento de medidas de formación de los usuarios profesionales y vendedores, así como la exigencia a los usuarios profesionales y vendedores de productos fitosanitarios de estar en posesión de un carné que acredite conocimientos apropiados para ejercer su actividad, según los niveles de capacitación establecidos y las materias especificadas para cada nivel; la exigencia de autorización previa para las aplicaciones aéreas de productos fitosanitarios en casos especiales, y la realización de un registro y seguimiento de las aplicaciones aéreas; la creación del Registro Oficial de Productores y Operadores de Medios de Defensa Fitosanitarios, de carácter constitutivo y que es el instrumento censal necesario para optimizar la realización de estadísticas y la planificación y realización de los controles oficiales que llevan a cabo las comunidades

[14] Vid. la disposición final cuarta del Real Decreto.

autónomas y de otras políticas agrarias, y para la necesaria información a los agricultores y demás interesados en la materia; y medidas de información y sensibilización para el público en general.

Otras de las medidas recogidas en el Real Decreto son las relativas a la venta de los productos fitosanitarios, entre las que destacan la obligación de los productores y distribuidores de productos fitosanitarios de uso profesional de llevar un registro de todas las operaciones de entrega a un tercero que realicen y la obligación de las entidades y los usuarios profesionales cuyas actividades comprendan la prestación de servicios de tratamientos fitosanitarios de llevar un registro de las operaciones realizadas, tanto de adquisición como de aplicación; a la protección del medio acuático y el agua potable, entre las que se incluyen diferentes medidas para evitar la contaminación puntual y difusa de las masas de aguas y medidas específicas para evitar la contaminación en zonas de extracción de agua para consumo humano; a la reducción del riesgo en zonas específicas; y a la manipulación y el almacenamiento de los productos fitosanitarios, envases y restos. Asimismo, también se incluyen disposiciones específicas para el uso de los productos fitosanitarios en ámbitos distintos de la producción agraria.

1.3. Novedades en materia de aguas

Además de las modificaciones del texto refundido de la Ley de Aguas acometidas por el Real Decreto-Ley 17/2012, que ya han sido objeto de análisis[15], en el período examinado se han aprobado otras normas importantes en el ámbito de las aguas. Cabe destacar, en primer lugar, el Real Decreto 1290/2012, de 7 de septiembre, por el que se modifican el Reglamento del Dominio Público Hidráulico (en adelante, RDPH), aprobado por el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril, y el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas[16].

[15] Vid. el epígrafe A del apartado 1.1 de esta crónica.

[16] En cuanto al título competencial que justifica la aprobación del Real Decreto, su disposición final primera dispone que el artículo 1, apartados 6 al 10, 14, 15 y del 18 al 20 y 24 se dictan al amparo del artículo 149.1.18 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica sobre concesiones administrativas; el artículo 1, apartados 11, 16, 21 al 23, del 25 al 30, 39 y 40 se dictan al amparo del artículo 149.1.22 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación, ordenación y concesión de recursos y aprovechamientos hidráulicos cuando las aguas discurren por más de una comunidad autónoma. Tiene el carácter de legislación básica sobre

Esta norma consta de dos artículos, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. El artículo primero modifica el RDPH, lo que constituye el objeto principal del Real Decreto, y el artículo segundo, el Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo.

La modificación del RDPH se justifica por la necesidad de solventar "la carencia de diversas disposiciones normativas, en el desarrollo reglamentario del texto refundido de la Ley de Aguas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio, que permitan una actuación homogénea en los distintos Organismos de cuenca y otras administraciones competentes a la hora de gestionar la utilización y protección del dominio público hidráulico en asuntos relacionados con los contenidos […] de los planes hidrológicos"[17]; y resolver las ambigüedades y las diversas insuficiencias de regulación normativa detectadas, por cuanto dificultan una gestión racional de dicho dominio. De este modo, con la modificación del RDPH se pretende introducir un nuevo desarrollo normativo de la gestión de la utilización y protección del dominio público hidráulico, demandado tanto por la normativa comunitaria como por la experiencia de la Administración hidráulica, que "debe ser objeto de una regulación común para todas las demarcaciones hidrográficas, y no debe ser independiente en cada plan hidrológico de cuenca"[18]. Con esta finalidad, se introducen algunas modificaciones en el título II del RDPH, relativo a la utilización del dominio público hidráulico —concretamente se modifican algunos preceptos del capítulo II, relativo a los usos comunes y privativos; del capítulo III, relativo a autorizaciones y concesiones; y del capítulo IV, sobre comunidades de usuarios—, y en el título III, relativo a la protección del dominio público hidráulico y de la calidad de las aguas continentales —concretamente, en el capítulo I, sobre normas generales, apeo y deslinde del dominio público y zonas de protección, y en el capítulo II, sobre los vertidos—.

Asimismo, se adapta el RDPH a la terminología del Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad ambiental en el ámbito de la política de aguas; se adapta el anexo IV del RDPH, sobre cálculo del canon de control de vertidos, a la nueva clasificación nacional de actividades económicas aprobada por el Real Decreto 475/2007, de 13 de abril, por el que se aprueba la Clasificación Nacional de Actividades

protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección, de acuerdo con lo preceptuado en el 149.1.23 CE, el resto de las disposiciones del artículo primero.

[17] Párrafo segundo del preámbulo del Real Decreto.

[18] Párrafo cuarto del preámbulo del Real Decreto.

Económicas, con objeto de adaptar la clasificación de los vertidos según grupos de actividades clasificadas por CNAE a efectos del cálculo del coeficiente de mayoración o minoración del canon de control de vertidos; y se crea un inventario de puntos de desbordamiento de aguas de escorrentía, desarrollándose el régimen jurídico de desbordamientos de aguas de escorrentía tanto para las autorizaciones de vertido existentes a la entrada en vigor de este régimen como para las nuevas solicitudes de autorización de vertido.

En el artículo segundo del Real Decreto 1290/2012 se modifica el artículo 2 del Real Decreto 509/1996 para contemplar, en la regulación de las condiciones técnicas de los sistemas colectores, las situaciones de contaminación por vertidos del medio receptor procedente del desbordamiento de aguas de escorrentía en circunstancias tales como lluvias torrenciales inusuales.

Finalmente, en aras de la simplificación y agilización administrativa y en coherencia con la modificación del artículo 264.1 RDPH, la disposición derogatoria única del Real Decreto 1290/2012 suprime, en el procedimiento de revocación de las autorizaciones de vertido al dominio público hidráulico, el informe preceptivo previsto en las respectivas normas reguladoras de los consejos del agua de las demarcaciones[19] "por considerarse un trámite que en esencia no aporta un valor añadido, al estar vinculado al resultado de un procedimiento sancionador previo por incumplimiento de las condiciones de la autorización de vertido"[20].

En segundo lugar, en el BOE de 15 de septiembre se han publicado diversos reales decretos por los que se aprueban los planes hidrológicos de varias cuencas internas de Andalucía y Galicia con arreglo a lo establecido por la Directiva Marco del Agua. Se trata de los reales decretos 1329/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Tinto, Odiel y Piedras; 1330/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica del Guadalete y Barbate; 1331/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de las

[19] Para ello, se deroga el párrafo d) del apartado 3 del artículo 2 de los Reales Decretos 1364/2011, de 7 de octubre, 1365/2011, de 7 de octubre, 1366/2011, de 7 de octubre, 1389/2011, de 14 de octubre, 1598/2011, de 4 de noviembre, 1626/2011, de 14 de noviembre, 1627/2011, de 14 de noviembre, 1704/2011, de 18 de noviembre, y 1705/2011, de 18 de noviembre, relativos, respectivamente, a las demarcaciones hidrográficas del Duero, Miño-Sil, Ebro, Guadiana, Guadalquivir, Cantábrico Occidental, Cantábrico Oriental, Tajo y Segura.

[20] Vid. el preámbulo del Real Decreto, párrafo decimotercero.

Cuencas Mediterráneas Andaluzas; y 1332/2012, de 14 de septiembre, por el que se aprueba el Plan Hidrológico de la Demarcación Hidrográfica de Galicia-Costa[21]. Con la aprobación de estos planes hidrológicos se avanza en el cumplimiento de la Directiva Marco del Agua, si bien no puede ocultarse el enorme retraso con que se está produciendo la aprobación de los planes hidrológicos de cuenca en España si tenemos en cuenta que el plazo expiraba en diciembre de 2009. Aún queda pendiente la aprobación de todos los planes hidrológicos de cuenca intercomunitarios, y, además, mediante la Sentencia de 4 de octubre de 2012, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea acaba de declarar el incumplimiento de España al no haber adoptado, a 22 de diciembre de 2009, los planes hidrológicos de cuenca, salvo en el caso del Distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña; al no haber enviado a la Comisión Europea y a los demás Estados miembros interesados, a 22 de marzo de 2010, un ejemplar de dichos planes; y al no haber iniciado, a más tardar el 22 de diciembre de 2008, el procedimiento de información y consulta públicas sobre los proyectos de los planes hidrológicos de cuenca —salvo en el caso de los planes hidrológicos de distrito de la Cuenca Fluvial de Cataluña, Islas Baleares, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, Cuenca Mediterránea Andaluza, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galicia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantábrico Occidental y Cantábrico Oriental—.

En tercer lugar, a través del Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, se ha introducido una modificación puntual en el Real Decreto 140/2003, de 7 de febrero, por el que se establecen los criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano. Concretamente, se ha añadido una nueva disposición adicional, la séptima, con el objetivo de que se contemplen las necesidades especiales de los abastecimientos de aguas en las Fuerzas Armadas[22]. Con arreglo a esta disposición, las disposiciones del Real Decreto 140/2003, cuando afecten a las unidades, los centros y los organismos pertenecientes al Ministerio de Defensa y sus organismos públicos, serán aplicadas por la Inspección General de Sanidad de la Defensa, coordinando las acciones que sean necesarias con el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, las comunidades autónomas y los municipios. Asimismo, prevé que, en el marco del Sistema de

[21] Los Reales Decretos 1329, 1330 y 1331/2012 sustituyen parcialmente, en lo concerniente a las mencionadas demarcaciones, al Plan Hidrológico Guadiana II, aprobado mediante el Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio; y el Real Decreto 1332/2012 sustituye y deroga el Plan Hidrológico de Galicia-Costa, aprobado por el Real Decreto 103/2003, de 24 de enero.

[22] Nótese que el Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.4 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre Defensa y Fuerzas Armadas.

Información Nacional de Agua de Consumo, el Ministerio de Defensa comunicará al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad la información relativa al control del agua de consumo humano que recabe en el ejercicio de sus competencias previstas en el apartado anterior.

Finalmente, también se ha aprobado el Real Decreto 1241/2012, de 24 de agosto —dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 58 del TRLA—, por el que se adoptan medidas administrativas excepcionales de gestión de los recursos hidráulicos para superar los efectos de la interrupción parcial del suministro mediante la infraestructura del trasvase Tajo-Segura en la cuenca hidrográfica del Segura. Este real decreto fija una serie de medidas excepcionales de gestión de los recursos hídricos para dotar a la Confederación Hidrográfica del Segura de los instrumentos legales que faculta el artículo 58 del TRLA y que le permitan proceder a la ordenación de los recursos en la forma más conveniente para el interés general y acometer las actuaciones de emergencia que sean necesarias. Estas medidas serán de aplicación a aquellos aprovechamientos de aguas públicas de las provincias de Murcia y Alicante que reciben suministro a través de la infraestructura que ha quedado sin servicio y que no pueden ser atendidos con los recursos almacenados en el embalse de la Pedrera; y también a aquellos otros aprovechamientos de aguas públicas que, en función de su concreta ubicación geográfica y circunstancias particulares, pueden ser empleados para abastecer a los anteriores. Entre estas medidas se incluyen determinadas atribuciones al presidente de la Confederación Hidrográfica para modificar temporalmente las condiciones de utilización del dominio público hidráulico por parte de los aprovechamientos incluidos en el ámbito territorial de aplicación (imponer la sustitución de la totalidad o de parte de los caudales concesionales por otros de distinto origen y de calidad adecuada para el uso al que está destinado, para racionalizar el aprovechamiento del recurso; autorizar temporalmente las modificaciones de características que soliciten los aprovechamientos afectados por la interrupción del suministro y que tengan por objeto el cambio del punto de toma; y adaptar el régimen de explotación de los aprovechamientos hidroeléctricos a las necesidades de suministro) y para autorizar las obras de control de caudales, captación, transporte y distribución necesarias para las modificaciones temporales de utilización del dominio público hidráulico; la tramitación con carácter de urgencia de los procedimientos afectados por la aplicación de las medidas excepcionales previstas en el Real Decreto, con la consiguiente reducción de todos los plazos previstos en

dichos procedimientos a la mitad; la supresión de los trámites de información pública y de informe de compatibilidad con el Plan Hidrológico de Cuenca en los procedimientos de modificación temporal de características contemplados en el Real Decreto; y la habilitación al presidente de la Confederación Hidrográfica para autorizar la puesta en marcha, por cuenta propia o ajena, de los sondeos o captaciones que permitan la aportación provisional de nuevos recursos a los aprovechamientos incluidos en el ámbito de aplicación del Real Decreto, facultad que incluye la puesta en servicio de sondeos o captaciones existentes en la medida en que sean imprescindibles para obtener los caudales suficientes con los que satisfacer las demandas más urgentes. En cualquier caso, las medidas recogidas en el Real Decreto únicamente se aplicarán mientras no se produzca la reanudación plena del suministro, que será declarada por el director general del Agua a propuesta del presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura; y las resoluciones adoptadas en aplicación del presente Real Decreto quedarán sin efecto una vez que este pierda su vigencia.

1.4. Novedades en materia de residuos

En el ámbito de los residuos se ha aprobado el Real Decreto 777/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 975/2009, de 12 de junio, sobre gestión de los residuos de las industrias extractivas y de protección y rehabilitación del espacio afectado por las actividades mineras. Estas modificaciones tienen su origen, por una parte, en el proyecto piloto 1259/10/ENVI, mediante el cual la Comisión Europea ha examinado la conformidad de la incorporación de la Directiva 2006/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2006, sobre la gestión de los residuos de industrias extractivas, mediante el Real Decreto 975/2009, concluyendo la necesidad de realizar una serie de modificaciones en dicho Real Decreto. Por otra, en el Acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de agosto de 2009, dictado a raíz del requerimiento de incompetencia formulado por la Xunta de Galicia, en el que se admite que la disposición final segunda del Real Decreto 975/2009 no debe incluir el carácter básico de su anexo V y al cual debe darse cumplimiento. Entre las principales modificaciones que se introducen destacan la remisión al TRLA que se incorpora en diferentes preceptos; la exclusión del ámbito de aplicación del Real Decreto 975/2009 de la actividad de inyección y reinyección de aguas subterráneas bombeadas, en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva 2006/21/CE; la modificación e

introducción de nuevas definiciones; la inclusión de una referencia a la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente; la modificación de la disposición adicional sexta; y la sustitución de los anexos I.A y I.B por el anexo I, que incluye la lista de residuos de las industrias extractivas que se pueden considerar inertes en virtud de la Decisión 2009/359/CE de la Comisión, de 30 de abril de 2009; y la exclusión del carácter básico del anexo V.

Por otro lado, mediante el Real Decreto 1080/2012, de 13 de julio, se ha modificado el Real Decreto 1749/1998, de 31 de julio, por el que se establecen las medidas de control aplicables a determinadas sustancias y sus residuos en los animales vivos y sus productos. La modificación únicamente afecta al artículo 24, relativo a las infracciones y sanciones, y entronca directamente con la Sentencia 135/2010, de 2 de diciembre. En esta sentencia el Tribunal Constitucional había otorgado el amparo solicitado por el recurrente, al que se había sancionado en virtud de lo establecido en los apartados 3.1 y 5 del artículo 24 del Real Decreto 1749/1998, que se remitía a la Ley General de Sanidad. Para el Tribunal, esta ley no podía considerarse como norma general habilitante y definidora de los elementos esenciales de la conducta antijurídica, por lo que el reglamento se excedía de la mera colaboración reglamentaria admitida en el marco del artículo 25.1 CE. Ahora, con esta modificación se adecúan las conductas tipificadas como infracciones y se apoyan en una norma legal que contiene los elementos esenciales de la conducta antijurídica que da cobertura a la regulación reglamentaria: la Ley 17/2011, de 5 de julio, de Seguridad Alimentaria y Nutrición. Todo ello con el fin de salvar el derecho fundamental a la legalidad sancionadora consagrado por el artículo 25.1 CE.

1.5. Novedades en materia de ruido

En materia de ruido se ha aprobado el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio, mediante el cual se modifica el Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones acústicas. La modificación únicamente afecta a la tabla A, que establece los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a las áreas urbanizadas existentes, del anexo II del Real Decreto 1367/2007, dedicado a los denominados objetivos de calidad acústica, tabla que es sustituida por otra. Este cambio

se produce para dar cumplimiento a la Sentencia del Tribunal Supremo (Sección 5.ª de la Sala 3.ª de lo Contencioso-Administrativo) de 20 de julio de 2010, que estimó parcialmente un recurso contra dicho Real Decreto, que anuló la expresión "Sin determinar" que figura en relación con el Tipo de Área Acústica f), dedicada a los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen, dentro de la tabla A del anexo II. De este modo, se establece que en los sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros equipamientos públicos que los reclamen, no podrán superarse en sus límites los objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al resto de áreas acústicas que colinden con ellos.

1.6. Novedades en materia de acceso a la información ambiental

En materia de acceso a la información ambiental, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ha dictado la Orden AAA/1601/2012, de 26 de junio, por la que se dictan instrucciones sobre la aplicación en el Departamento de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. Se trata de una instrucción —de las previstas en el artículo 21 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, adoptada en ejercicio de las competencias atribuidas al ministro por el artículo 12.2.h) de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado— a través de la cual se pretende mejorar el procedimiento especial de tramitación y resolución de las solicitudes de información ambiental que se reciben en este ministerio, en sus órganos y en los diferentes organismos públicos y entidades que tiene adscritos, y evitar determinadas disfunciones que pudieran producirse en su aplicación.

A pesar de las limitaciones de la Orden, tanto por su carácter de instrucción como por su ámbito limitado al Ministerio y a los organismos públicos y entidades adscritos a este, debe valorarse positivamente su adopción en la medida en que puede contribuir a una mejor aplicación de la Ley 27/2006, de 18 de julio, por lo que respecta al acceso a la información ambiental. En esta instrucción pueden encontrarse pautas interpretativas y de aplicación en relación con temas tan relevantes como el concepto de información ambiental, el público como solicitante de información, la coordinación entre unidades,

la forma o formato de la información suministrada, el régimen de contraprestación por el derecho a la información ambiental o las excepciones a la obligación de facilitar la información ambiental. De especial interés resulta el anexo de la Instrucción, que recoge aclaraciones y criterios jurisprudenciales relativos a las excepciones a la obligación de facilitar información ambiental que pueden contribuir en gran medida a una mejor aplicación de estas, evitando su aplicación abusiva.

1.7. Novedades de carácter organizativo

En materia organizativa destaca, en primer lugar, la aprobación del Real Decreto 776/2012, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 2355/2004, de 23 de diciembre, por el que se regulan la estructura y funciones del Consejo Asesor de Medio Ambiente. Se trata de una modificación menor en la composición de este órgano colegiado, de participación y seguimiento de las políticas ambientales generales orientadas al desarrollo sostenible, con el fin de adecuarla a las modificaciones operadas en virtud del Real Decreto 1823/2011, de 21 de diciembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, el Real Decreto 1887/2011, de 30 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, y el Real Decreto 401/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Concretamente, se modifica el artículo 3.2 y se prevé que actuará como suplente del presidente el secretario de Estado de Medio Ambiente —anteriormente era el subsecretario de Medio Ambiente—.

En segundo lugar, se crea la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas, órgano colegiado con competencias decisorias que se adscribe al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que tiene como función coordinar la elaboración, la aplicación y el seguimiento de la planificación del medio marino. En cuanto a su composición, la Comisión está integrada por un presidente (el titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), un vicepresidente (el titular de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio citado), varios vocales (dos representantes, con rango mínimo de director general o asimilado, de cada uno de los siguientes departamentos ministeriales: Ministerio de Fomento, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Agricultura, Alimentación y

Medio Ambiente; y un representante, con rango mínimo de director general o asimilado, de cada uno de los siguientes departamentos ministeriales: Ministerio de Defensa, Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) y un secretario (el titular de la División para la Protección del Mar de la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar). También podrán incorporarse a la Comisión, en función del contenido de las materias a tratar y a invitación de la Presidencia, representantes de otros órganos de la Administración general del Estado, así como expertos en dichas materias para que, con voz pero sin voto, colaboren y asesoren a la Comisión. Entre las funciones de la Comisión Interministerial de Estrategias Marinas se encuentran el análisis y la evaluación de la información relacionada con el medio marino que los departamentos ministeriales integrados en la Comisión puedan aportar para contribuir a la elaboración, la aplicación y el seguimiento de las estrategias marinas; el intercambio de información sobre instalaciones, proyectos y planes sectoriales que estén ubicados, que afecten o que se prevean en el medio marino, con el fin de asegurar su coherencia con la estrategia marina que se apruebe para cada demarcación; el análisis de los diversos componentes de las estrategias marinas elaborados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, así como la coordinación de la participación de los departamentos ministeriales integrados en la Comisión en la evaluación inicial del estado del medio marino, la definición del buen estado ambiental de este, la identificación de objetivos ambientales, el establecimiento de programas de seguimiento y la puesta en marcha de programas de medidas, así como en la actualización de las estrategias marinas; el seguimiento de las estrategias marinas y de las actuaciones que los diferentes departamentos ministeriales lleven a cabo en cumplimiento de estas; y cualquier otra función que, en el marco de sus competencias, se le atribuya por disposición legal o reglamentaria.

Por último, mediante la Orden AAA/1745/2012, de 26 de julio, se ha creado la Comisión Ministerial de Seguimiento y Coordinación de Ayudas del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y de sus organismos públicos y entidades vinculadas o dependientes, adscrita a la Subsecretaría del Departamento, como órgano colegiado encargado de garantizar la mejor política de fomento del Departamento y de sus organismos públicos.

1.8. Otras normas de interés

En el ámbito internacional cabe destacar la entrada en vigor del Acuerdo entre el Reino de España y el Principado de Andorra sobre el traslado de residuos, hecho en Madrid el 29 de noviembre de 2011, que tiene por objeto regular el traslado de residuos entre ambos Estados[23]; y la publicación del Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la República Francesa en el ámbito de las situaciones de emergencia y de protección y seguridad civiles, hecho en Madrid el 28 de abril de 2009, que entró en vigor el 25 de agosto de 2012[24].

También debe mencionarse el Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios[25], que tiene por objeto el impulso y la dinamización de la actividad comercial minorista y de determinados servicios mediante la eliminación de cargas y restricciones administrativas existentes que afectan al inicio y ejercicio de la actividad comercial, en particular, mediante la supresión de las licencias de ámbito municipal vinculadas a los establecimientos comerciales, sus instalaciones y determinadas obras previas. La intervención local sobre las actividades ya había sido objeto previamente de diferentes reformas, de las que se ha dado cuenta en crónicas anteriores, con el fin de reducir cargas administrativas y licencias. Así, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, modificó el artículo 84 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, con el fin de someter los actos de control preventivo de ámbito municipal a sus principios cuando se trate del acceso y ejercicio de actividades de servicios. Posteriormente, la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, incorporó a la citada Ley 7/1985 los artículos 84 bis y 84 ter, estableciendo con carácter general la inexigibilidad de licencia u otros medios de control preventivos para el ejercicio de actividades, salvo que afecten a la protección del medio ambiente o del patrimonio histórico-artístico, la seguridad o la salud públicas, o que impliquen el uso privativo y la ocupación de los bienes de dominio público, y

[23] Vid. el BOE núm. 157, de 2 de julio de 2012.

[24] Vid. el BOE núm. 219, de 11 de septiembre de 2012.

[25] Vid. también la Resolución de 14 de junio de 2012, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-Ley 19/2012, de 25 de mayo, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios (BOE núm. 148, de 21 de junio de 2012).

condicionando, en todo caso, la exigibilidad de la licencia a un juicio de necesidad y proporcionalidad. Ahora, el Real Decreto-Ley 19/2012 da un paso más allá en el impulso de reducción de cargas y licencias en el ámbito del comercio minorista y elimina todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa para las actividades comerciales minoristas y la prestación de determinados servicios previstos en el anexo del Real Decreto-Ley, realizados a través de establecimientos permanentes, situados en cualquier parte del territorio nacional y cuya superficie útil de exposición y venta al público no sea superior a 300 metros cuadrados[26]. Es más, la flexibilización va más allá de la Ley 2/2011 y afecta también a todas las obras ligadas al acondicionamiento de estos locales, no siendo exigible licencia o autorización previa para la realización de las obras ligadas al acondicionamiento de los locales para desempeñar la actividad comercial cuando no requieran de la redacción de un proyecto de obra de conformidad con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación. Para estas actividades, las licencias serán sustituidas por declaraciones responsables o por comunicaciones previas, relativas al cumplimiento de las previsiones legales establecidas en la normativa vigente; y el declarante deberá estar, en todo caso, en posesión del justificante de pago del tributo correspondiente cuando sea preceptivo. De este modo, para este tipo de establecimientos ya no podrán argüirse razones de protección ambiental para justificar el mantenimiento de la licencia. Como se pone de manifiesto en su preámbulo: "Mediante este real decreto-ley se avanza un paso más eliminando todos los supuestos de autorización o licencia municipal previa, motivados en la protección del medio ambiente, de la seguridad o de la salud públicas, ligados a establecimientos comerciales y otros que se detallan en el anexo con una superficie de hasta 300 metros cuadrados. Se considera, tras realizar el juicio de necesidad y proporcionalidad, que no son necesarios controles previos por tratarse de actividades que, por su naturaleza, por las instalaciones que requieren y por la dimensión del establecimiento, no tienen un impacto susceptible de control a través de la técnica autorizatoria, la cual se sustituye por un régimen de control ex post basado en una declaración responsable".

[26] Con arreglo al artículo 2.2 del Real Decreto-Ley: "Quedan al margen de la regulación contenida en el título I de este real decreto-ley las actividades desarrolladas en los mencionados establecimientos que tengan impacto en el patrimonio histórico-artístico o en el uso privativo y ocupación de los bienes de dominio público".

Por último, debe destacarse la aprobación de otras normas de interés como el Real Decreto-Ley 25/2012, de 7 de septiembre, por el que se aprueban medidas urgentes para paliar los daños producidos por los incendios forestales y otras catástrofes naturales ocurridos en varias comunidades autónomas; el Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Químico, dictado al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.29 CE, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre seguridad pública; y la Orden PRE/1665/2012, de 19 de julio, por la que se modifica el anexo III del Real Decreto 227/2006, de 24 de febrero, por el que se complementa el régimen jurídico sobre la limitación de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles en determinadas pinturas y barnices y en productos de renovación del acabado de vehículos.

2. Derecho y políticas ambientales autonómicas

La actividad normativa autonómica en materia ambiental en el período objeto de análisis ha sido prácticamente inexistente si se compara con otros semestres anteriores. El contexto de crisis y la difícil situación económica a que se enfrenta Cataluña, unida a la convocatoria anticipada de elecciones al Parlament de Catalunya y su disolución —mediante el Decreto del President de la Generalitat de Catalunya 104/2012, de 1 de octubre— y a un nuevo escenario político, han relegado las cuestiones ambientales a un segundo plano, al menos desde la vertiente normativa. En efecto, ha sido un semestre pobre en novedades normativas. No se ha aprobado en estos meses ninguna norma con rango de ley en materia ambiental —si exceptuamos, por no ser estrictamente ambiental, la Ley 8/2012, de 25 de junio, de modificación de los límites y la denominación de la Reserva Nacional de Caza del Alt Pallars-Aran—, siendo las normas más destacables las referidas a la actividad de fomento, que en buena medida se ha mantenido a pesar de la situación de crisis económica actual, y alguna de carácter organizativo.

En cambio, sí hay una reseña digna de mención desde el punto de vista de las iniciativas y actuaciones de interés político. Nos referimos a la aprobación por parte del Gobierno catalán del Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020.

2.1. La escasa actividad normativa autonómica

Como hemos avanzado, la actividad normativa autonómica en estos últimos meses ha sido ciertamente escasa y limitada a normas de carácter reglamentario. Son pocas las novedades en este período. Aparte de las numerosas órdenes departamentales para la aprobación de las bases reguladoras y convocatoria de ayudas y subvenciones con finalidades de interés ambiental[27], únicamente cabe destacar el Decreto 101/2012, de 25 de septiembre, por el que se modifica el Decreto 160/2010, de 9 de noviembre, de regulación del premio Ramon Margalef de Ecología; y la Orden TES/265/2012, de 30 de agosto, de modificación de la Orden MAH/463/2005, de 25 de noviembre, por la que se crea la Comisión para la Sostenibilidad de Les Terres de l'Ebre y se regulan su composición y sus funciones, con el fin de adaptar este órgano consultivo, asesor, de concertación y participación a la nueva estructura administrativa de la Generalitat.

También pueden mencionarse las órdenes AAM/111/2012, de 25 de abril, por la cual se da publicidad a la relación de las tasas vigentes correspondientes a los procedimientos tramitados por el Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Natural; AAM/206/2012, de 29 de junio, por la cual se aprueban los precios públicos para la prestación de servicios en los espacios naturales de protección especial; y AAM/254/2012, de 31 de agosto, de aprobación del Plan Piloto de recolección de setas dentro del ámbito del paraje natural de interés nacional de Poblet y de su zona de influencia, y de creación del precio público vinculado al Plan Piloto.

En otro orden de cosas, se han adoptado en estos meses algunos acuerdos de Gobierno interesantes desde una perspectiva ambiental. Destacamos, entre ellos, los acuerdos GOV/61/2012, de 26 de junio, de renovación parcial de los miembros del Consejo Asesor para el Desarrollo Sostenible; GOV/70/2012, de 3 de julio, por el que se autorizan la reducción del capital de Ecoparc de Residus Industrials, S. A., y la modificación de sus Estatutos; GOV/74/2012, de 10 de julio, por el que se da publicidad

[27] Vid., por ejemplo, las órdenes TES/152/2012, de 7 de junio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones para actuaciones de ordenación ambiental de la iluminación exterior; TES/205/2012, de 3 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras generales de las subvenciones para la promoción y la consolidación de la custodia del territorio en Cataluña; TES/226/2012, de 13 de julio, por la que se aprueban las bases reguladoras de las subvenciones a asociaciones y fundaciones para la financiación de actuaciones y proyectos de educación y sensibilización ambiental; y AAM/147/2012, de 6 de junio, por la que se convocan para el año 2012 las ayudas a la gestión forestal sostenible para fincas de titularidad pública destinadas a la gestión forestal, la recuperación del potencial forestal y prevención de incendios, la diversificación de la economía rural y la transformación y la comercialización de los productos forestales.

a la delimitación del lugar de importancia comunitaria (LIC) ES5140004 Sèquia Major, que resulta de la quinta lista actualizada de lugares de importancia comunitaria de la Región Biogeográfica Mediterránea aprobada por la Comisión Europea; GOV/81/2012, de 31 de julio, por el que se modifica puntualmente el Programa de seguimiento y control del distrito de cuenca hidrográfica o fluvial de Cataluña, aprobado por el Acuerdo GOV/128/2008, de 3 de junio; y GOV/82/2012, de 31 de julio, por el que se declaran como zona de protección especial del ambiente atmosférico, por el contaminante dióxido de nitrógeno, varios municipios de las comarcas de El Baix Llobregat, de El Vallès Occidental y de El Vallès Oriental.

Por otro lado, también se han establecido los criterios ambientales para el otorgamiento del distintivo de garantía de calidad ambiental a los equipamientos culturales, bibliotecas y museos (Resolución TES/787/2012, de 2 de abril), y a las materias primas y a los productos de plástico reciclado (Resolución TES/788/2012, de 2 de abril); se ha aprobado el Cuaderno de Normas Técnicas de la producción agroalimentaria ecológica (Resolución AAM/951/2012, de 15 de mayo); y se ha convocado el Premio Escuelas Verdes de la Generalitat de Catalunya para el año 2012 (Resolución TES/1088/2012, de 17 de abril).

2.2. El Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020

Sin duda, lo más destacable en el período objeto de examen es la aprobación, mediante el Acuerdo del Gobierno GOV/97/2012, de 9 de octubre, del Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020[28], que servirá de guía para las políticas energéticas y de mitigación del cambio climático en Cataluña.

Este plan tiene su origen en el Plan de Gobierno 2011-2014, cuyo apartado 6.6 establecía la necesidad de diseñar un nuevo modelo energético equilibrado basado en garantizar la calidad del suministro; establecer un modelo competitivo económicamente y con menos dependencia exterior; respetar el medio ambiente, con un peso más grande de las energías renovables; reducir los combustibles fósiles; y mejorar la eficiencia en la utilización de la energía para llegar a un modelo catalán de generación y consumo que sea sostenible. Asimismo, en su apartado 6.4 incluía la voluntad de impulsar políticas ambientales y de lucha contra el cambio climático como eje transversal y vertebrador, lo

[28] Acuerdo publicado en el DOGC núm. 6231, de 11 de octubre de 2012.

que suponía, entre otros aspectos, el establecimiento de un modelo energético que contribuyera a conseguir objetivos generales en materia de reducción de gases de efecto invernadero.

En esta línea, el Plan de Gobierno preveía, por una parte, la necesidad de tramitar y aprobar por el Gobierno un nuevo Plan de la Energía de Cataluña 2012-2020 que mejorase la planificación energética para Cataluña; y, por otra, la de impulsar un plan de mitigación de las emisiones que cubriera el período 2013-2020, de acuerdo con los objetivos de reducción de emisiones establecidos por la Unión Europea. De la confluencia de ambos propósitos surge la voluntad de impulsar un plan que incluya tanto los aspectos derivados de la planificación energética como los aspectos vinculados a las emisiones de gases de efecto invernadero del ciclo de la energía.

El Plan de la Energía y Cambio Climático de Cataluña 2012-2020 aborda la nueva orientación que el actual Gobierno de la Generalitat quiere dar a la política energética catalana, integrando aquellos aspectos de la mitigación del cambio climático relacionados con la energía. Dada la estrecha relación de la energía con las cuatro dimensiones de la sostenibilidad (económica, social, de equilibrio territorial y ambiental), el objetivo es conseguir una economía y una sociedad de baja intensidad energética y de baja emisión de carbono, innovadora, competitiva y sostenible a medio y largo plazo. En este sentido, los objetivos europeos para el año 2020 constituyen un marco de referencia de la actuación de la Generalitat en materia de política energética y de cambio climático, si bien el Plan también analiza el potencial y la capacidad de reacción desde Cataluña en el supuesto de que la Unión Europea acordase un nuevo objetivo más ambicioso de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y de un nuevo reparto de esfuerzos entre sus Estados miembros.

En este marco, el Plan determina diez ejes estratégicos de la nueva política energética catalana. Son los siguientes: las políticas de desarrollo y eficiencia energética serán claves para asegurar el logro de un sistema energético sostenible para Cataluña; las energías renovables como opción estratégica de presente y de futuro para Cataluña; la política energética catalana debe contribuir a los compromisos del Estado español de reducción de gases de efecto invernadero en el seno de la Unión Europea; la consolidación del sector de la energía como oportunidad de crecimiento económico y creación de empleo cualificado; la mejora de la seguridad y la calidad del suministro energético y el desarrollo de las infraestructuras energéticas necesarias para lograr el

nuevo sistema energético de Cataluña; las políticas energéticas y ambientales catalanas deben tener estrategias coherentes para conseguir un futuro sostenible para Cataluña, integrando su desarrollo social, económico y ambiental; acelerar el impulso a la I+D+i de nuevas tecnologías en el ámbito energético; la actuación decidida de la Generalitat y las restantes administraciones públicas catalanas en relación con el nuevo modelo energético como elemento ejemplarizante y de dinamización; llevar la política energética al máximo nivel estratégico; y la implicación de la sociedad civil en la construcción del nuevo modelo energético del país: formación, información, participación e inclusión de los sectores sociales más desfavorecidos económicamente.

Asimismo, fija objetivos cuantitativos de la oferta y la demanda energética en el horizonte del año 2020 y objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; y estrategias singulares que se consideran necesarias para alcanzar estos objetivos, entre las que se encuentran las relativas a la energía eólica, el vehículo eléctrico, la sostenibilidad energética en el sector de los edificios, las infraestructuras eléctricas, el aprovechamiento energético de la biomasa forestal, la valorización energética de los residuos, la implantación de un sector empresarial en sectores emergentes en el ámbito energético, el nuevo enfoque de actuación de la Administración energética catalana y las directrices para el Plan de Emergencia Energética de Cataluña.

Por último, también incluye una memoria económica en la que se recogen las inversiones y los recursos económicos públicos asociados al Plan, los recursos económicos para el Plan provenientes de las políticas de mitigación del cambio climático y las repercusiones económicas de las políticas propuestas en el Plan.

Una de las principales novedades del Plan es la integración, desde su fase de diseño, de las políticas energéticas y de mitigación del cambio climático. Desde la perspectiva climática, el Plan constituye una parte muy significativa de la planificación en materia de política climática, pero solo incluye los aspectos de mitigación del cambio climático relativos al ciclo energético como, por ejemplo, la producción de electricidad, las industrias manufactureras y de construcción, el transporte o los sectores residencial, comercial e institucional. No incluye, sin embargo, otros aspectos del cambio climático como las emisiones de gases de efecto invernadero no vinculadas a la energía, el denominado efecto sumidero (bosques, agricultura…), la adaptación a los impactos del cambio climático o el desarrollo de modelos climáticos regionales, que serán objeto de

tratamiento en el Plan de Mitigación y la Estrategia de Adaptación. Precisamente en estos momentos está en proceso de elaboración la Estrategia Catalana de Adaptación al Cambio Climático, horizonte 2013-2020, con relación a la cual se ha abierto un proceso participativo.

Sumari. 1. Dret estatal aplicable a Catalunya. 1.1. El Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient. A. Modificacions del Text refós de la llei d'aigües. B. Modificacions de la llei del patrimoni natural i de la biodiversitat. C. Modificacions de la llei de residus i sòls contaminats. D. Modificació de la llei del mercat de valors. 1.2. El nou marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. 1.3. Novetats en matèria d'aigües. 1.4. Novetats en matèria de residus. 1.5. Novetats en matèria de soroll. 1.6. Novetats en matèria d'accés a la informació ambiental. 1.7. Novetats de caràcter organitzatiu. 1.8. Altres normes d'interès. 2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques. 2.1. L'escassa activitat normativa autonòmica. 2.2. El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

1. Dret estatal aplicable a Catalunya

L'activitat normativa desplegada per l'Estat durant el període objecte d'anàlisi (de l'1 de maig al 15 d'octubre de 2012) ha estat àmplia, i un bon nombre de normes en matèria ambiental han vist la llum, totes provinents de l'acció normativa del Govern. Es tracta, a més, de les primeres normes en matèria ambiental que aprova el nou Govern del Partit Popular després de la victòria a les urnes, si n'exceptuem les relatives a la reestructuració organitzativa de les competències ambientals, de les quals vam informar en la crònica anterior.

En aquests mesos, no s'ha aprovat cap llei nova en matèria de protecció del medi ambient; qüestió lògica, d'altra banda, si tenim en compte els pocs mesos que han transcorregut des de l'inici de la nova legislatura. No obstant això, sí que s'han introduït modificacions importants en preceptes concrets d'altres normes amb rang de llei prèvies, com el Text refós de la llei d'aigües (d'ara endavant, TRLA), la llei del patrimoni natural i de la biodiversitat, i la llei de residus i sòls contaminats. L'instrument triat a aquests efectes ha estat el decret llei, per la qual cosa la matèria ambiental tampoc no s'escapa de la tendència prou generalitzada en els últims temps d'intensa utilització d'aquesta figura per adoptar mesures davant de la situació de greu crisi econòmica que pateix el nostre país, tot i que la utilització del decret llei només està prevista amb caràcter excepcional en la Constitució, "*en caso de extraordinaria y urgente necesidad*". Entre els molts paquets de mesures contra la crisi que hem vist periòdicament que es publiquen al BOE, es troba el de mesures urgents en matèria de medi ambient, adoptat mitjançant el Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, i justificat per la necessitat de simplificació i agilització administrativa i racionalització del marc jurídic actual, a fi de contribuir a la reactivació de l'economia i a la generació d'ocupació. De nou, hi ha canvis en la legislació ambiental justificats per la crisi econòmica, tendència en alça ara per ara.

Així mateix, com és habitual, s'han aprovat unes quantes normes reglamentàries en àmbits sectorials diversos (aigües, soroll, residus…), tot i que en la major part de casos no es tracta pròpiament de reglaments nous, sinó de modificacions dels existents, justificades per diferents motius. També hem d'esmentar la Interlocutòria de 28 de març de 2012, de la Sala Tercera (Secció Tercera) del Tribunal Suprem, per la qual es decreta la suspensió de la vigència del Reial decret 1628/2011, de 14 de novembre, pel qual es regula el Llistat i Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores, pel que fa a la inclusió de les espècies truita de rierol *(Salvelinus fontinalis)* i perca americana o *black bass (Micropterus salmoides)* en l'annex I (Catàleg espanyol d'espècies exòtiques invasores) i de les espècies truita arc iris *(Oncorhinchus mykiss)* i salmó del Danubi *(Hucho hucho)* en l'annex II (Llistat d'espècies exòtiques amb potencial invasor) del reial decret esmentat, en el marc de la peça separada de mesures cautelars dimanant del recurs contenciós administratiu interposat per la Federació Espanyola de Pesca i Càsting[29].

En l'àmbit internacional, destaca l'entrada en vigor de l'acord entre Espanya i el Principat d'Andorra sobre el trasllat de residus, fet a Madrid el 29 de novembre de 2011.

D'altra banda, en relació amb els recursos d'inconstitucionalitat presentats pel president del Govern contra determinats incisos de l'annex 2 de la Llei de Castella-la Manxa 6/2011, de 10 de març, de declaració del Parque Natural del Valle de Alcudia y Sierra Madrona, i de l'annex 2 de la Llei de Castella-la Manxa 5/2011, de 10 de març, de declaració del Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara, dels quals vam donar informar en la crònica anterior, el Tribunal Constitucional ha acordat aixecar la suspensió que es va produir amb l'admissió d'aquests recursos, mitjançant sengles interlocutòries de 8 de maig de 2012, exceptuant l'incís 36 de l'apartat 2.2.4 de l'annex 2 de la Llei de Castella-la Manxa 5/2011, de 10 de març, respecte al qual sí que es manté la suspensió[30]. En aquest període també s'ha plantejat una qüestió d'inconstitucionalitat en relació amb la suposada inconstitucionalitat de la Llei de les Corts de Castella i Lleó 2/2008, de 17 de juny, de declaració del projecte regional per a la instal·lació d'un centre de tractament de residus industrials no perillosos en el terme municipal de Fresno de la Ribera, per possible vulneració dels articles 9.3, 24.1, en

[29] BOE núm. 153, de 27 de juny de 2012. Correcció d'errors en el BOE núm. 160, de 5 de juliol de 2012.

[30] Vid. BOE núm. 121, de 21 de maig de 2012.

relació amb l'article 117, en el vessant de dret a l'execució de les resolucions judicials, i 149.1.23 de la CE, en relació amb l'article 5.4 de la Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus[31].

Finalment, en aquest període, també han iniciat la tramitació parlamentària diferents projectes de llei d'interès en matèria ambiental: el de mesures fiscals per a la sostenibilitat energètica[32]; el de declaració com a parc nacional de Las Cumbres de la Sierra del Guadarrama[33]; i el de protecció i ús sostenible del litoral i de modificació de la llei de costes[34], que ha d'introduir novetats importants en aquest àmbit. I el Govern ha anunciat modificacions d'altres normes ambientals en un futur pròxim, com les relatives a la responsabilitat mediambiental, a fi de reduir càrregues administratives i simplificar procediments; i al desenvolupament sostenible del medi rural, per fer operativa la llei i poder-la aplicar en totes les comunitats autònomes.

1.1. El Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient

Com hem avançat, la norma més important en matèria ambiental que s'ha dictat en el període objecte d'anàlisi és el Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient[35]. D'aquesta manera, la matèria ambiental és objecte d'atenció en un dels nombrosos paquets de mesures que, amb caràcter urgent i utilitzant la figura del decret llei, ha aprovat el Consell de Ministres en els últims mesos. A través d'aquesta norma s'escomet la reforma parcial de tres normes amb rang de llei de gran importància en matèria ambiental: el TRLA, la llei de patrimoni natural i de la biodiversitat, i la llei de residus i sòls contaminats, tot i que també es modifica una llei no ambiental, la del mercat de valors, per tal de realitzar ajustos en matèria de comerç de drets d'emissió.

Es tracta d'una norma que ha suscitat moltes crítiques per part de les associacions

[31] BOE núm. 164, de 10 de juliol de 2012.

[32] BOCG. Congrés dels Diputats, núm. A-25-1, de 28 de setembre de 2012.

[33] BOCG. Congrés dels Diputats, núm. A-22-1, de 14 de setembre de 2012.

[34] BOCG. Congrés dels Diputats, núm. A-29-1, de 19 d'octubre de 2012.

[35] Vid. també la Resolució de 17 de maig de 2012, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'acord de convalidació del Reial decret llei 17/2012, de 4 de maig, de mesures urgents en matèria de medi ambient. BOE núm. 125, de 25 de maig de 2012.

ecologistes, tant per l'instrument escollit per emprendre aquestes reformes legislatives i la davallada de la participació pública que ha comportat, com pel contingut d'algunes de les mesures adoptades (especialment, en matèria de residus). Aquesta norma es justifica en el preàmbul per l'actual context econòmic: "*En una situación como la actual, en la que se están encarando profundas reformas estructurales que permitan la reactivación de nuestra economía y la generación de empleo, resulta indispensable la reforma urgente de ciertos aspectos de nuestra legislación ambiental que contribuyan a lograr ese objetivo, sin merma del principio de protección*". Partint d'aquesta premissa, la reforma "*se orienta a la simplificación administrativa, eliminando aquellos mecanismos de intervención que por su propia complejidad resultan ineficaces, y lo que es más grave, imponen demoras difíciles de soportar para los ciudadanos y dificultades de gestión para las Administraciones publicas*". Per això, la simplificació i l'agilització administrativa de les normes ambientals, i la necessitat que aquestes normes siguin clares i senzilles, amb arguments de caràcter econòmic, es converteixen en elements justificadors de la reforma. Fins i tot en el preàmbul s'afirma que "*la legislación ambiental también debe ser sostenible*".

Pel que fa als títols competencials que serveixen de fonament, l'article 1, que modifica el TRLA, es dicta a l'empara de la competència atribuïda a l'Estat per l'article 149.1.22 CE per als apartats 1, 9 i 10, 149.1.13 CE per als apartats 2, 8 i 11, i 149.1.18 per als apartats del 3 al 6 i 12 i 13; l'article 4, pel qual es modifica la llei del mercat de valors, es dicta a l'empara del que disposen les regles 6, 11 i 13 de l'article 149.1 CE; i la disposició transitòria única es dicta a l'empara de l'habilitació que conté la clàusula 13 de l'article 149.1 CE, en matèria de bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica[36].

A. Modificacions del Text refós de la llei d'aigües

En l'àmbit de les aigües, el Reial decret llei 17/2012 ha introduït modificacions importants en el TRLA, a fi de "conseguir un uso más adecuado del agua, a través de una gestión eficaz y coordinada en la que se preserve como principio fundamental el de unidad de gestión de cuenca". Entre les quals, destaquem, en primer lloc, novetats en el règim jurídic de les aigües subterrànies. Amb la finalitat de racionalitzar la gestió i l'ús

[36] Vid. la disposició final 1a del Reial decret llei 17/2012.

de l'aigua, en línia amb la directiva marc d'aigües, es regulen les masses d'aigua subterrània i el seu bon estat. Així, se substitueix el concepte d'"*acuífero sobreexplotado*" pel de "*masa de agua subterránea en riesgo de no alcanzar el buen estado cuantitativo o químico*", per adequar la terminologia del TRLA a la directiva marc; se suprimeix la possibilitat prevista anteriorment d'atorgar concessions d'aigües subterrànies en els aqüífers declarats sobreexplotats o en risc d'estar-ho, només en circumstàncies de sequera prèviament constatades i d'acord amb el Pla d'Ordenació per a la Recuperació de l'Aqüífer (derogació de l'apartat primer de la disposició addicional 7a); s'elimina el dictamen preceptiu del Consell de l'Aigua perquè la Junta de Govern dels organismes de conca declari una massa d'aigua en risc de no aconseguir un bon estat quantitatiu o químic; i es modifiquen alguns aspectes del règim de protecció de les aigües subterrànies, entre els quals destaquen la introducció de novetats en el contingut dels programes d'actuació per a la seva recuperació (podran preveure l'aportació de recursos externs a la massa d'aigua subterrània, i en aquest cas, el programa d'actuació ha d'incloure els criteris per a l'explotació conjunta dels recursos existents en la massa i dels externs; establir la delimitació i les condicions dels perímetres de protecció de les masses d'aigua subterrània en què calgui autorització per realitzar obres d'infraestructura, extracció d'àrids i altres activitats i instal·lacions que puguin afectar-la, que han de vincular a les administracions públiques competents en l'ordenació del territori i urbanisme quant a l'elaboració dels instruments de planificació i a l'atorgament de les llicències; i preveure les condicions en què temporalment es podran superar les limitacions establertes, i permetre així extraccions superiors als recursos disponibles d'una massa d'aigua subterrània, sempre que el compliment dels objectius mediambientals estigui garantit), i en el procediment perquè s'aprovi (es preveu la possibilitat d'adoptar fins a l'aprovació, amb les mesures cautelars, mesures de protecció de la qualitat de les aigües, i s'elimina la necessitat de consulta preceptiva al Consell de l'Aigua), i més flexibilitat en l'aplicació dels mateixos programes (quan es millori l'estat de la massa d'aigua subterrània com a conseqüència de l'aplicació del programa d'actuació, l'organisme de conca, d'ofici o a instància de part, podrà reduir progressivament les limitacions del programa i augmentar, de forma proporcional i equitativa, el volum que es pot utilitzar sempre que no es posi en risc la permanència dels objectius generals ambientals).

En segon lloc, en el TRLA s'introdueix la disposició addicional 14a a fi de regular la

cessió de drets en l'àmbit del Pla Especial de l'Alt Guadiana, l'aplicació urgent de la qual ha d'impedir el deteriorament de l'aqüífer i ha de mantenir la sostenibilitat de les instal·lacions agrícoles derivades i la reordenació dels drets d'ús de les aigües tendents a la recuperació ambiental dels aqüífers. Per això, es flexibilitzen els requisits necessaris per a la cessió previstos amb caràcter general en el TRLA (no cal que la cessió es realitzi a un altre concessionari o titular de dret del mateix rang o d'un rang superior segons l'ordre de preferència establert pel Pla Hidrològic de la Conca, ni que el volum d'aigua cedit no superi el que realment ha utilitzat el cedent), tot i que, quan l'ús a què es destini l'aigua sigui de regadiu, no es podrà incrementar la superfície que ja tingui reconeguda la part cessionària. Com a novetat, la cessió d'aprofitaments d'aigües no s'ha de realitzar amb caràcter temporal, sinó "*de forma irreversible i en su totalidad*". Per això, l'organisme de conca ha d'atorgar a la part cessionària la corresponent concessió (en la qual el volum d'aigua concedit ha de ser un percentatge del volum objecte de transmissió, que s'ha de determinar en atenció a les condicions tècniques i ambientals que concorrin i, si és el cas, vinculat al programa d'actuació per a la recuperació del bon estat de la massa d'aigua) fins al 31 de desembre de 2035[37].

En tercer lloc, s'inclouen mesures per incentivar, com a mecanisme potestatiu, la transformació dels drets d'aprofitament privats d'aigües en drets concessionals, amb l'objectiu, entre altres, de facilitar i millorar la gestió d'episodis meteorològics i hidrològics desfavorables. Amb aquesta finalitat, en el TRLA s'introdueixen dues disposicions transitòries noves: la 3a bis, amb el títol de "Disposicions comunes a l'aplicació de l'apartat tercer de les disposicions transitòries segona i tercera", i la 10a, amb el títol de "Transformació de drets privats en concessionals". La 1a preveu que, als efectes d'aplicació de l'apartat 3r de les disposicions transitòries 2a i 3a, s'ha de considerar modificació de les condicions o del règim d'aprofitament, entre altres, "les actuacions que suposin la variació de la profunditat, diàmetre o localització del pou, així com qualsevol canvi en l'ús, ubicació o variació de superfície sobre la qual s'aplica el

[37] POVEDA GÓMEZ, P. i LOZANO CUTANDA, B. ("Mesures urgents en matèria de medi ambient (Reial decret llei 17/2012)", *Diario La Ley*, núm. 7858, 2012) posen de manifest que "En realidad, el Real Decreto Ley está admitiendo la posibilidad de una transmisión íntegra de la concesión, pero al ser consciente de que dicha transmisión requiere una modificación del título concesional —en la medida que el aprovechamiento objeto de transmisión va a permitir utilizar el recurso para otros usos o para terrenos distintos de los previstos en la concesión original—, se ve obligado a admitir la necesidad del otorgamiento de una nueva concesión, que determinará los nuevos usos o el terreno al cual se va a aplicar (en caso de concesiones de riego), en sustitución de la concesión originaria que es objeto de transmisión, pero que dejará de tener eficacia jurídica como consecuencia de la cesión acordada."

recurs en el cas d'aprofitament de regadiu". A més, la concessió a la qual es refereixen aquestes disposicions transitòries s'ha d'atorgar, a instància de part, sense procediment de competència de projectes, i el termini no ha de ser inferior al que estableix la inscripció en la secció C del Registre d'Aigües; a més, en aquest moment té preferència el concessionari per obtenir una nova concessió.

D'acord amb la nova disposició transitòria 10a, els titulars d'aprofitaments d'aigües inscrits en el Catàleg d'aigües privades de la conca a què es refereix la disposició transitòria 4a, poden sol·licitar en qualsevol moment la inscripció en el Registre d'Aigües de la conca, per la qual cosa han d'instar l'atorgament de la corresponent concessió. En aquests casos, l'atorgament de la concessió es du a terme sense competència de projectes, i el terme de la concessió és el 31 de desembre de 2035, i en aquest moment té preferència el concessionari per obtenir una nova concessió. No obstant això, si la sol·licitud de concessió fa referència a masses d'aigua subterrània declarades en risc de no aconseguir un bon estat i que tenen el programa d'actuació a què es refereix l'article 56, la concessió està sotmesa a les limitacions establertes en aquest programa. Si no hi ha cap programa d'actuació aprovat, no es pot instar la transformació del dret.

En quart lloc, es posa fi a la criticada cessió mitjançant el decret llei de les competències estatals en matèria d'aigües operada pel Reial decret llei 12/2012, que va introduir l'apartat 1 a la disposició addicional 7a del TRLA, ara derogat, que habilitava, per exercir les facultats de policia del domini públic hidràulic en les conques intercomunitàries, i per tramitar els procediments a què donaren lloc les seves actuacions fins a la proposta de resolució, les comunitats autònomes que haguessin assumit en els estatuts la competència executiva sobre aquestes facultats. La finalitat d'aquest canvi és "evitar que amb aquesta reforma legal pugui veure's afectat el principi d'unitat de gestió de les conques hidrogràfiques intercomunitàries, elevat a principi constitucional pel Tribunal Constitucional en les sentències 227/1988, 161/1996 i 30 i 32/2011. I sortir al pas dels desplegaments normatius que sobre aquesta matèria hagin realitzat o puguin realitzar les comunitats autònomes habilitades per aquesta disposició addicional"[38].

En cinquè lloc, pel que fa al règim economicofinancer del domini públic hidràulic, es

[38] Vid. el preàmbul del Reial decret llei 17/2012, paràgraf 11è.

modifiquen els apartats 1 i 3 de l'article 111.bis ("Principis generals del règim economicofinancer de la utilització del domini públic hidràulic"*)*. D'una banda, d'acord amb la nova redacció de l'apartat 1, les administracions públiques estableixen, en virtut del principi de recuperació de costos i tenint en compte projeccions econòmiques a llarg termini, els mecanismes oportuns per repercutir els costos dels serveis relacionats amb la gestió de l'aigua, incloent-hi els costos ambientals i del recurs, en els diferents usuaris finals. D'altra banda, amb la modificació de l'apartat 3, s'estableix la possibilitat que l'Administració competent pugui exceptuar motivadament l'esmentat principi de recuperació de costos per a determinats usos sempre que no es comprometin els fins i l'èxit dels objectius ambientals.

Finalment, en matèria sancionadora, després de la Sentència del Tribunal Suprem (Sala Contenciosa Administrativa) de 4 de novembre de 2011, que va declarar la nul·litat parcial de l'Ordre MAM/85/2008, de 16 de gener, per la qual s'estableixen els criteris tècnics per a la valoració dels danys al domini públic hidràulic i les normes sobre presa de mostres i anàlisi d'abocaments d'aigües residuals, es modifica l'article 117 del TRLA per incorporar, sense perjudici de l'ulterior desplegament reglamentari, els criteris generals que s'han de tenir en compte en la valoració del dany causat en el domini públic hidràulic, determinants per qualificar la infracció. Es pretén, amb això, garantir "l'exercici de la potestat sancionadora amb ple respecte al principi de legalitat (article 25 de la Constitució), en la seva doble vessant de reserva legal i tipicitat"[39].

B. Modificacions de la llei del patrimoni natural i de la biodiversitat

En matèria de patrimoni natural i biodiversitat, hi ha dues modificacions destacables. D'una banda, es preveu la coordinació dels règims jurídics de protecció dels diferents espais naturals protegits quan conflueixin en un mateix espai. Per això, es modifica l'apartat 2 de l'article 28 de la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del patrimoni natural i la biodiversitat, i es preveu que si se solapen en un mateix lloc diferents figures d'espais protegits, les normes reguladores d'aquests espais, així com els mecanismes de planificació "s'han de coordinar per unificar-se en un únic document integrat, a fi que els diferents règims aplicables en funció de cada categoria conformin un tot coherent".

D'altra banda, respecte de les zones especials de conservació i les zones d'especial

[39] Vid. el preàmbul del Reial decret llei 17/2012, paràgraf 10è.

protecció per a les aus, les comunitats autònomes han de determinar les mesures de conservació necessàries, que responguin a les exigències ecològiques dels tipus d'hàbitats naturals i de les espècies presents en aquestes àrees, que impliquen, entre altres mesures, plans i instruments de gestió adequats. La novetat és que ara aquests plans "han de tenir en especial consideració les necessitats dels municipis inclosos en la totalitat o en un gran percentatge del territori en aquests llocs" [nou art. 45.1.a)].

C. Modificacions de la llei de residus i sòls contaminats

El Reial decret llei 17/2012 també introdueix algunes modificacions en la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats, "amb la finalitat de simplificar i reduir les càrregues administratives que ocasionaven ambigüitat, incertesa i inseguretat en l'aplicació de la norma" i també "per eliminar la indeterminació i inseguretat jurídica"[40]. Entre aquestes modificacions, destaquen, en matèria de reutilització, reciclatge i valoració de residus, la previsió que les mesures de foment que puguin adoptar les autoritats ambientals, en el respectiu àmbit competencial i en atenció als principis de prevenció i foment de la reutilització i el reciclatge d'alta qualitat, han de tenir, també, com a finalitat, a més del foment de la reutilització dels productes i de les activitats de preparació per a la reutilització, el foment del reciclatge (nova redacció de l'apartat 1 de l'article 21).

Amb relació als sistemes de dipòsit, devolució i retorn, se suprimeix la possibilitat, anteriorment establerta de forma expressa, d'adoptar mesures destinades a facilitar la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a determinats envasos i productes reutilitzables, tenint en compte la viabilitat tècnica i econòmica d'aquests sistemes, els impactes ambientals, socials, etc. (supressió de l'apartat 2 de l'art. 21). Aquesta modificació es complementa amb la que s'introdueix en els articles 31.2.d) i 31.3. En el primer d'aquests preceptes, que incloïa la possibilitat d'obligar els productors dels productes que amb l'ús es converteixen en residus a establir un sistema de dipòsit, devolució i retorn que permetés la devolució de les quantitats dipositades i el retorn del producte per a la seva reutilització o del residu per al seu tractament, ara es puntualitza que aquest sistema només pot establir-se "en els casos de residus de difícil valoració o eliminació, de productes o residus les característiques dels quals determinen

[40] Preàmbul del Reial decret llei 17/2012, paràgraf 4t.

que aquests sistemes siguin l'opció més adequada per a la seva correcta gestió o quan no es compleixin els objectius de gestió fixats en la normativa vigent". I en el nou article 31.3 es preveu que la implantació de sistemes de dipòsit, devolució i retorn de residus s'ha d'establir amb caràcter voluntari, amb el límit dels supòsits previstos en l'article 31.2.d).

Quant al règim dels trasllats de residus a l'interior del territori de l'Estat, es modifica l'article 25 de la llei, i estableix que les notificacions prèvies a les autoritats competents de la comunitat autònoma d'origen i de la de destí realitzades pels operadors que traslladin residus "poden ser generals amb la durada temporal que es determini reglamentàriament o es poden referir a trasllats concrets".

També s'inclouen algunes modificacions en relació amb els sistemes col·lectius de gestió. Així, es modifica l'apartat 3 de l'article 32, a fi de sotmetre els sistemes col·lectius de responsabilitat ampliada de la part productora, únicament, a l'autorització concedida en la comunitat autònoma on tingui previst establir la seu social, que ha de ser vàlida per a tot el territori nacional i s'ha d'inscriure en el Registre de producció i gestió de residus[41]. D'aquesta manera, se suprimeix la necessitat d'obtenir autoritzacions de la resta de les comunitats autònomes en què el sistema tingui previst actuar, que anteriorment sí que eren exigibles. La participació de les comunitats autònomes diferents de la comunitat en què el sistema col·lectiu tingui la seu social es garanteix a través de l'informe preceptiu que, amb caràcter previ a la resolució autoritzatòria de la comunitat autònoma, ha d'emetre la Comissió de Coordinació en matèria de residus, òrgan col·legiat del qual formen part totes les comunitats autònomes, amb representants de l'Estat i de les entitats locals. Aquesta Comissió també pot realitzar el seguiment del compliment de les autoritzacions i de les condicions d'exercici.

Finalment, en matèria sancionadora, es modifica l'article 49.3 per aclarir que en els supòsits d'abandó, abocament o eliminació incontrolats dels residus, la recollida i gestió dels quals correspon a les entitats locals, així com en el del lliurament sense que es compleixin les condicions previstes en les ordenances locals, la potestat sancionadora correspon als titulars de les entitats locals.

[41] En relació amb els sistemes col·lectius de gestió, vid. també la nova redacció que es dóna a la disposició transitòria 4a i a l'apartat 7 de l'annex X de la Llei 22/2011.

D. Modificació de la llei del mercat de valors

En matèria de comerç de drets d'emissió, s'afegeix la disposició addicional 21a en la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, que porta causa en el Reglament (UE) núm. 1210/2011 de la Comissió, de 23 de novembre de 2011, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1031/2010, de la Comissió, de 12 de novembre de 2010, sobre el calendari, la gestió i altres aspectes de les subhastes dels drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle d'acord amb la Directiva 2003/87/CE del Parlament europeu i del Consell. Els aspectes més destacables d'aquesta nova disposició addicional són quatre. En primer lloc, permet que les empreses que presten serveis d'inversió i les entitats de crèdit autoritzades a prestar serveis d'inversió puguin presentar ofertes en nom dels clients en les subhastes de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, que no siguin instruments financers, a la qual cosa es refereix el Reglament núm. 1031/2010. Amb aquest fi, han d'incloure aquesta activitat en el programa d'activitats a la qual es refereix l'article 66 d'aquesta llei, relatiu a l'autorització i el registre. En segon lloc, atorga a la Comissió Nacional del Mercat de Valors la competència per sancionar les persones responsables de l'incompliment en el nostre territori dels articles que van del 37 al 42 del Reglament (UE) núm. 1031/2010, en relació amb les subhastes de drets d'emissió de gasos d'efecte d'hivernacle, que no siguin instruments financers, realitzades en el nostre territori o fora. Per això, compta amb les facultats de supervisió i inspecció. En tercer lloc, en matèria sancionadora, preveu l'aplicació, en cas d'incompliment dels articles del 37 al 42 del Reglament (UE) núm. 1031/2010, del règim sancionador previst en el capítol II del títol VIII de la llei del mercat de valors en relació amb les operacions amb informació privilegiada o que puguin constituir manipulació de mercat, tot i que determina algunes particularitats. Finalment, cal assenyalar que la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha de cooperar amb altres autoritats competents de la Unió Europea, amb les plataformes de subhastes i amb l'entitat supervisora de les subhastes sempre que calgui per dur a terme les funcions establertes en el Reglament (UE) núm. 1031/2010 i en relació amb les matèries i en els termes que es regulen en aquest reglament.

1.2. El nou marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris

Recentment, s'ha aprovat el Reial decret 1311/2012, de 14 de setembre, pel qual s'estableix el marc d'actuació per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris. Aquest reial decret, que desplega la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal, i trasllada a l'ordenament espanyol la Directiva 2009/128/CE, del Parlament europeu i del Consell, de 21 d'octubre de 2009, per la qual s'estableix el marc d'actuació comunitari per aconseguir un ús sostenible dels plaguicides —a excepció del que es refereix en l'article 8 i en l'annex II—, es dicta a l'empara de l'article 149.1, apartats 13, 16 i 23, de la CE, que atribueix a l'Estat respectivament la competència exclusiva en matèria de bases i la coordinació de la planificació general de l'activitat econòmica, bases i coordinació general de la sanitat, i legislació bàsica sobre protecció del medi ambient.

L'objecte és establir el marc d'acció per aconseguir un ús sostenible dels productes fitosanitaris mitjançant la reducció dels riscos i els efectes del seu ús en la salut humana i el medi ambient, i el foment de la gestió integrada de plagues i de plantejaments o tècniques alternatius, com ara els mètodes no químics; i l'aplicació i el desplegament reglamentari de certs preceptes relatius a la comercialització, la utilització i l'ús racional i sostenible dels productes fitosanitaris, establerts per la Llei 43/2002, de 20 de novembre, de sanitat vegetal. Quant a l'àmbit d'aplicació, afecta tant els productes utilitzats en les activitats agràries com els utilitzats en altres àmbits professionals diferents.

A fi de complir aquests objectius, en aquesta norma es preveuen diferents mecanismes per aconseguir un ús més racional dels productes fitosanitaris. En primer lloc, es preveu que el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, abans del 26 de novembre de 2012, adopti el Pla d'Acció Nacional d'Ús Sostenible dels Productes Fitosanitaris amb l'objectiu de reduir els riscos i els efectes de la utilització de productes fitosanitaris en la salut humana i en el medi ambient, i fomentar el desenvolupament i la introducció de la gestió integrada de plagues i de tècniques o plantejaments alternatius a fi de reduir la dependència de l'ús de productes fitosanitaris. En aquest Pla s'han de desplegar bona part de les mesures que totes les administracions públiques han de posar en marxa per garantir la sostenibilitat en l'ús dels productes fitosanitaris.

En segon lloc, es regula la gestió integrada de plagues, que s'imposa, pel que fa als usos

agraris, a partir de l'1 de gener de 2014[42]. Aquesta gestió integrada consisteix en l'examen acurat de tots els mètodes de protecció vegetal disponibles i posterior integració de mesures adequades per evitar el naixement de poblacions d'organismes nocius i mantenir l'ús de productes fitosanitaris i altres formes d'intervenció en nivells que estiguin econòmicament i ecològicament justificats i que redueixin o minimitzin els riscos per a la salut humana i el medi ambient. La gestió integrada de plagues posa èmfasi a conrear cultius sans amb la mínima alteració possible dels agroecosistemes i a promoure els mecanismes naturals de control de plagues.

En tercer lloc, entre les mesures que preveu aquest reial decret i que han de posar en marxa les administracions públiques implicades, s'inclouen l'establiment de mesures de formació dels usuaris professionals i venedors, i l'exigència als usuaris professionals i venedors de productes fitosanitaris que tinguin un carnet que acrediti coneixements apropiats per exercir la seva activitat, segons els nivells de capacitació establerts i les matèries especificades per a cada nivell; l'exigència d'autorització prèvia per a les aplicacions aèries de productes fitosanitaris en casos especials, i la realització d'un registre i seguiment de les aplicacions aèries; la creació del Registre oficial de productors i operadors de mitjans de defensa fitosanitaris, de caràcter constitutiu i que és l'instrument censal necessari per optimitzar la realització d'estadístiques, de la planificació i realització dels controls oficials que duen a terme les comunitats autònomes i d'altres polítiques agràries, i per a la necessària informació als agricultors i la resta d'interessats en la matèria; i mesures d'informació i sensibilització per al públic en general.

Altres mesures que recull aquest reial decret són les relatives a la venda dels productes fitosanitaris, entre les quals destaca l'obligació dels productors i distribuïdors de productes fitosanitaris d'ús professional a portar el registre de totes les operacions d'entrega a un tercer que realitzin i l'obligació de les entitats i dels usuaris professionals les activitats dels quals comprenguin la prestació de serveis de tractaments fitosanitaris, a portar un registre de les operacions realitzades, tant d'adquisició com d'aplicació; a la protecció del medi aquàtic i l'aigua potable, entre les quals s'inclouen diferents mesures per evitar la contaminació puntual i difusa de les masses d'aigües i mesures específiques per evitar la contaminació en zones d'extracció d'aigua per a consum humà; a la reducció del risc en zones específiques; i a la manipulació i emmagatzematge dels

[42] Vid. la disposició final 4a d'aquest reial decret.

productes fitosanitaris, envasos i restes. Així mateix, també s'inclouen disposicions específiques per a l'ús dels productes fitosanitaris en àmbits diferents de la producció agrària.

1.3. Novetats en matèria d'aigües

A més de les modificacions del Text refós de la llei d'aigües dutes a terme per mitjà del Reial decret llei 17/2012, que ja han estat objecte d'anàlisi[43], en el període analitzat s'han aprovat altres normes importants en l'àmbit de les aigües. Cal destacar, en primer lloc, el Reial decret 1290/2012, de 7 de setembre, pel qual es modifiquen el Reglament del domini públic hidràulic (d'ara endavant, RDPH), aprovat pel Reial decret 849/1986, d'11 d'abril, i el Reial decret 509/1996, de 15 de març, de desplegament del Reial decret llei 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s'estableixen les normes aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes[44]. Aquesta norma consta de dos articles, una disposició derogatòria i dues disposicions finals. L'article primer modifica el RDPH, la qual cosa constitueix l'objecte principal d'aquest reial decret; i l'article segon, el Reial decret 509/1996, de 15 de març.

La modificació del RDPH es justifica per la necessitat de resoldre "la carència de diverses disposicions normatives, en el desplegament reglamentari del Text refós de la llei d'aigües, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, que permeten una actuació homogènia en els diferents organismes de conca i altres administracions competents a l'hora de gestió de la utilització i protecció del domini públic hidràulic en assumptes relacionats amb els continguts (…) dels plans hidrològics"[45]; i resoldre les ambigüitats i les diverses insuficiències de regulació normativa detectats, ja que dificulten la gestió racional d'aquest domini. D'aquesta manera, amb la modificació del RDPH es pretén introduir un nou desplegament normatiu de la gestió de la utilització i protecció del domini públic hidràulic, demanat tant per la normativa comunitària com

[43] Vid. l'epígraf A de l'apartat 1.1 d'aquesta crònica.

[44] Quant al títol competencial que justifica l'aprovació d'aquest reial decret, la disposició final 1a disposa que l'article 1, apartats del 6 al 10, 14, 15 i del 18 al 20 i 24 es dicten a l'empara de l'article 149.1.18 CE, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de legislació bàsica sobre concessions administratives; l'article 1, apartats 11, 16, del 21 al 23, del 25 al 30, 39 i 40 es dicten a l'empara de l'article 149.1.22 CE, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva en matèria de legislació, ordenació i concessió de recursos i aprofitaments hidràulics si les aigües discorren per més d'una comunitat autònoma; i té el caràcter de legislació bàsica sobre protecció del medi ambient, sense perjudici de les facultats de les comunitats autònomes d'establir normes addicionals de protecció, d'acord amb el que estableix el 149.1.23 CE, la resta de les disposicions de l'article primer.

[45] Paràgraf 2n del preàmbul d'aquest reial decret.

per l'experiència de l'Administració hidràulica, que "ha de ser objecte d'una regulació comuna per a totes les demarcacions hidrogràfiques, i no ha de ser independent en cada pla hidrològic de conca"[46]. Amb aquesta finalitat, s'introdueixen algunes modificacions en el títol II del RDPH, relatiu a la utilització del domini públic hidràulic —concretament es modifiquen alguns preceptes del capítol II, relatiu als usos comuns i privatius; del capítol III, relatiu a autoritzacions i concessions; i del capítol IV, sobre comunitats d'usuaris— i en el títol III, relatiu a la protecció del domini públic hidràulic i de la qualitat de les aigües continentals —concretament, en el capítol I, sobre normes generals, fitació i delimitació del domini públic i zones de protecció, i en el capítol II, sobre els abocaments.

Així mateix, s'adapta el RDPH a la terminologia del Reial decret 60/2011, de 21 de gener, sobre les normes de qualitat ambiental en l'àmbit de la política d'aigües; s'adapta l'annex IV del RDPH, sobre càlcul del cànon de control d'abocaments, a la nova classificació nacional d'activitats econòmiques aprovada pel Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la classificació nacional d'activitats econòmiques, a fi d'adaptar la classificació dels abocaments segons grups d'activitats classificades per CNAE, als efectes del càlcul del coeficient de majoració o minoració del cànon de control d'abocaments; i es crea un inventari de punts de desbordament d'aigües d'escolament, es desplega el règim jurídic de desbordaments d'aigües d'escolament tant per a les autoritzacions d'abocament existents a la seva entrada en vigor, com per a les noves sol·licituds d'autorització d'abocament.

En l'article segon del Reial decret 1290/2012 es modifica l'article 2 del Reial decret 509/1996 per preveure, en la regulació de les condicions tècniques dels sistemes col·lectors, les situacions de contaminació per abocaments del mitjà receptor procedent del desbordament d'aigües d'escolament, en circumstàncies com ara pluges torrencials inusuals.

Finalment, per assolir la simplificació i l'agilització administrativa, i en coherència amb la modificació de l'article 264.1 RDPH, la disposició derogatòria única del Reial decret 1290/2012 suprimeix l'informe preceptiu previst en les respectives normes reguladores dels consells de l'aigua de les demarcacions en el procediment de revocació de les

[46] Paràgraf 4t del preàmbul d'aquest reial decret.

autoritzacions d'abocament al domini públic hidràulic[47], "por considerarse un trámite que en esencia no aporta un valor añadido, al estar vinculado al resultado de un procedimiento sancionador previo por incumplimiento de las condiciones de la autorización de vertido"[48].

En segon lloc, en el BOE de 15 de setembre s'han publicat uns quants reials decrets pels quals s'aproven els plans hidrològics de diverses conques internes d'Andalusia i Galícia, d'acord amb el que estableix la directiva marc d'aigües. Es tracta del Reial Decret 1329/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Tinto, Odiel i Piedras; el Reial decret 1330/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica del Guadalete i Barbate; el Reial decret 1331/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de les Conques Mediterrànies Andaluses; i el Reial decret 1332/2012, de 14 de setembre, pel qual s'aprova el Pla Hidrològic de la Demarcació Hidrogràfica de Galícia-Costa[49]. Amb l'aprovació d'aquests plans hidrològics s'avança en el compliment de la directiva marc d'aigües, si bé no podem ocultar l'enorme retard amb què s'aproven els plans hidrològics de conca a Espanya, si tenim en compte que el termini expirava al desembre de 2009. Encara queda pendent aprovar tots els plans hidrològics de conca intercomunitaris i, a més, mitjançant la Sentència de 4 d'octubre de 2012, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acaba de declarar l'incompliment d'Espanya, per no haver adoptat, a 22 de desembre de 2009, els plans hidrològics de conca, excepte en el cas del districte de la conca fluvial de Catalunya; per no haver enviat a la Comissió Europea i als altres estats membres interessats, a 22 de març de 2010, un exemplar dels plans; i per no haver iniciat, a tot estirar el 22 de desembre de 2008, el procediment d'informació i de consulta públiques sobre els projectes dels plans hidrològics de conca —excepte en el cas dels plans

[47] Per això, es deroga el paràgraf d) de l'apartat 3 de l'article 2 del Reial decret 1364/2011, de 7 d'octubre; del Reial decret 1365/2011, de 7 d'octubre; del Reial decret 1366/2011, de 7 d'octubre, el Reial decret 1389/2011, de 14 d'octubre; el Reial decret 1598/2011, de 4 de novembre; el Reial decret 1626/2011, de 14 de novembre; el Reial decret 1627/2011, de 14 de novembre; el Reial decret 1704/2011, de 18 de novembre, i el Reial decret 1705/2011, de 18 de novembre, relatius, respectivament, a les demarcacions hidrogràfiques del Duero, Miño-Sil, Ebre, Guadiana, Guadalquivir, Cantàbric Occidental, Cantàbric Oriental, Tajo i Segura.

[48] Vid. el preàmbul d'aquest reial decret, paràgraf 13è.

[49] El Reial decret 1329, el Reial decret 1330 i el Reial decret 1331/2012 substitueixen parcialment pel que fa a les demarcacions esmentades, el Pla Hidrològic Guadiana II, aprovat mitjançant el Reial decret 1664/1998, de 24 de juliol; i el Reial decret 1332/2012 substitueix i deroga el Pla Hidrològic de Galícia-Costa, aprovat pel Reial decret 103/2003, de 24 de gener.

hidrològics de districte de la conca fluvial de Catalunya, Illes Balears, Tenerife, Guadiana, Guadalquivir, conca mediterrània andalusa, Tinto-Odiel-Piedras, Guadalete-Barbate, Galícia-Costa, Miño-Sil, Duero, Cantàbric occidental i Cantàbric oriental.

En tercer lloc, per mitjà del Reial decret 1120/2012, de 20 de juliol, s'ha introduït una modificació puntual en el Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà. Concretament, s'ha afegit una nova disposició addicional, la 7a, amb l'objectiu que es prevegin les necessitats especials d'abastiment d'aigua a les Forces Armades[50]. D'acord amb aquesta disposició, les disposicions del Reial decret 140/2003, si afecten les unitats, els centres i els organismes pertanyents al Ministeri de Defensa i els seus organismes públics, han de ser aplicades per la Inspecció General de Sanitat de la Defensa, coordinant les accions que calgui amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, les comunitats autònomes i els municipis. Així mateix, preveu que, en el marc del Sistema d'Informació Nacional d'Aigua de Consum, el Ministeri de Defensa ha de comunicar al Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat la informació relativa al control de l'aigua de consum humà que demani en l'exercici de les seves competències previstes en l'apartat anterior.

Finalment, també s'ha aprovat el Reial decret 1241/2012, de 24 d'agost —dictat a l'empara del que disposa l'article 58 del TRLA—, pel qual s'adopten mesures administratives excepcionals de gestió dels recursos hidràulics per superar els efectes de la interrupció parcial del subministrament mitjançant la infraestructura del transvasament Tajo-Segura en la conca hidrogràfica del Segura. Aquest reial decret determina una sèrie de mesures excepcionals de gestió dels recursos hídrics, a fi de dotar la Confederació Hidrogràfica del Segura dels instruments legals que faculta l'article 58 del TRLA i que li permeten ordenar els recursos en la forma més convenient per a l'interès general i escometre les actuacions d'emergència que calgui. Aquestes mesures han de ser aplicables als aprofitaments d'aigües públiques de les províncies de Múrcia i Alacant que reben subministrament a través de la infraestructura que ha quedat sense servei i que no poden ser atesos amb els recursos emmagatzemats en l'embassament de la Pedrera; i també als altres aprofitaments d'aigües públiques que, en funció de la concreta ubicació geogràfica i circumstàncies particulars, poden ser utilitzats per abastir els anteriors. Entre aquestes mesures, s'inclouen determinades

[50] Noteu que el Reial decret 1120/2012, de 20 de juliol, es dicta a l'empara del que disposa l'article 149.1.4 CE, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre defensa i forces armades.

atribucions al president de la Confederació Hidrogràfica per modificar temporalment les condicions d'utilització del domini públic hidràulic per part dels aprofitaments inclosos en l'àmbit territorial d'aplicació (imposar la substitució de la totalitat o de part dels cabals concessionals per altres de diferent origen i de qualitat adequada per a l'ús a què està destinat, per racionalitzar l'aprofitament del recurs; autoritzar temporalment les modificacions de característiques que sol·liciten els aprofitaments afectats per la interrupció del subministrament i que tinguin com a objecte el canvi del punt de presa; i adaptar el règim d'explotació dels aprofitaments hidroelèctrics a les necessitats de subministrament) i per autoritzar les obres de control de cabals, captació, transport i distribució necessàries per a les modificacions temporals d'utilització del domini públic hidràulic; la tramitació amb caràcter d'urgència dels procediments afectats per l'aplicació de les mesures excepcionals previstes en aquest reial decret, amb la conseqüent reducció de tots els terminis previstos en aquests procediments a la meitat; la supressió dels tràmits d'informació pública i d'informe de compatibilitat amb el Pla Hidrològic de Conca en els procediments de modificació temporal de característiques previstos en aquest reial decret; i l'habilitació al president de la Confederació Hidrogràfica per autoritzar la posada en marxa, per compte propi o de manera aliena, dels sondejos o captacions que permeti l'aportació provisional de nous recursos als aprofitaments inclosos en l'àmbit d'aplicació d'aquest reial decret, facultat que inclou la posada en servei de sondejos o captacions existents en la mesura que siguin imprescindibles per obtenir els cabals suficients amb què cal satisfer les demandes més urgents. En tot cas, les mesures recollides en aquest reial decret únicament s'han d'aplicar mentre no es produeixi la represa plena del subministrament, que ha de ser declarada pel director general de l'Aigua, a proposta del president de la Confederació Hidrogràfica del Segura; i les resolucions adoptades, quan s'apliqui aquest reial decret, quedaran sense efecte un cop aquest decret perdi la vigència.

1.4. Novetats en matèria de residus

En l'àmbit dels residus, s'ha aprovat el Reial decret 777/2012, de 4 de maig, que introdueix algunes modificacions en el Reial decret 975/2009, de 12 de juny, sobre gestió dels residus de les indústries extractives i de protecció i rehabilitació de l'espai afectat per les activitats mineres. Aquestes modificacions tenen el seu origen, d'una banda, en el projecte pilot 1259/10/ENVI, mitjançant el qual la Comissió Europea ha

analitzat la conformitat de la incorporació de la Directiva 2006/21/CE del Parlament europeu i del Consell, de 15 de març de 2006, sobre la gestió dels residus d'indústries extractives, mitjançant el Reial decret 975/2009, que conclou la necessitat de realitzar una sèrie de modificacions en aquest reial decret. D'altra banda, en l'Acord del Consell de Ministres de 28 d'agost de 2009, dictat arran del requeriment d'incompetència formulat per la Xunta de Galícia, en el qual s'admet que la disposició final 2a del Reial decret 975/2009 no ha d'incloure el caràcter bàsic del seu annex V, i que s'ha de complir. Entre les principals modificacions que s'introdueixen, destaquen la remissió al TRLA que s'incorpora en diferents preceptes; l'exclusió de l'àmbit d'aplicació del Reial decret 975/2009, de l'activitat d'injecció i de reinjecció d'aigües subterrànies bombades, en compliment del que disposa la Directiva 2006/21/CE; la modificació i introducció de noves definicions; la inclusió d'una referència a la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient; la modificació de la disposició addicional 6a; i la substitució dels annexos I.A i I.B per l'annex I, que inclou la llista de residus de les indústries extractives que es poden considerar inertes en virtut de la Decisió 2009/359/CE de la Comissió, de 30 d'abril de 2009; i l'exclusió del caràcter bàsic de l'annex V.

D'altra banda, mitjançant el Reial decret 1080/2012, de 13 de juliol, s'ha modificat el Reial decret 1749/1998, de 31 de juliol, pel qual s'estableixen les mesures de control aplicables a determinades substàncies i als seus residus en els animals vius i en els seus productes. La modificació únicament afecta l'article 24, relatiu a les infraccions i sancions, i entronca directament amb la Sentència 135/2010, de 2 de desembre. En aquesta sentència, el Tribunal Constitucional havia atorgat l'empara sol·licitada per la part recurrent, que s'havia sancionat en virtut del que estableixen els apartats 3.1 i 5 de l'article 24 del Reial decret 1749/1998, que remetia a la llei general de sanitat. Pel Tribunal, aquesta llei no podia considerar-se norma general habilitant i definidora dels elements essencials de la conducta antijurídica, per la qual cosa el reglament s'excedia de la mera col·laboració reglamentària admesa en el marc de l'article 25.1 CE. Ara, amb aquesta modificació s'adeqüen les conductes tipificades com a infraccions i es recolzen en una norma legal que conté els elements essencials de la conducta antijurídica que dóna cobertura a la regulació reglamentària: la Llei 17/2011, de 5 de juliol, de seguretat alimentària i nutrició. Tot això a fi de salvar el dret fonamental a la legalitat

sancionadora consagrat per l'article 25.1 CE.

1.5. Novetats en matèria de soroll

En matèria de soroll, s'ha aprovat el Reial decret 1038/2012, de 6 de juliol, mitjançant el qual es modifica el Reial decret 1367/2007, de 19 d'octubre, pel qual es desplega la Llei 37/2003, de 17 de novembre, del soroll, pel que fa a zonificació acústica, objectius de qualitat i emissions acústiques. La modificació únicament afecta la taula A, que estableix els objectius de qualitat acústica per a sorolls aplicables a les àrees urbanitzades existents, de l'annex II del Reial decret 1367/2007, dedicat als esmentats objectius de qualitat acústica, que és substituïda per una altra. Aquest canvi es produeix per complir la Sentència del Tribunal Suprem (Secció 5a de la Sala 3a Contenciosa Administrativa), de 20 de juliol de 2010, que va estimar parcialment un recurs contra el reial decret esmentat, que va anul·lar l'expressió "sense determinar" que figura en relació amb el Tipus d'Àrea Acústica f), dedicada als sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que els reclamen, dins de la taula A de l'annex II. D'aquesta manera, s'estableix que en els sectors del territori afectats a sistemes generals d'infraestructures de transport, o altres equipaments públics que ho reclamen, no podran superar-se en els seus límits els objectius de qualitat acústica per a soroll aplicables a la resta d'àrees acústiques que hi confronten.

1.6. Novetats en matèria d'accés a la informació ambiental

En matèria d'accés a la informació ambiental, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient ha dictat l'Ordre AAA/1601/2012, de 26 de juny, per la qual es dicten instruccions sobre l'aplicació en aquest departament de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, per la qual es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient. Es tracta d'una instrucció —de les previstes en l'art. 21 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, adoptada en exercici de les competències atribuïdes al ministre per l'art. 12.2.h) de la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'organització i funcionament de l'Administració General de l'Estat— a través de la qual es pretén millorar el procediment especial de tramitació i resolució de les

sol·licituds d'informació ambiental que rep aquest ministeri, els òrgans i els diferents organismes públics i entitats que hi té adscrits, i evitar determinades disfuncions que puguin produir-se quan s'apliqui.

Malgrat les limitacions d'aquesta ordre, tant pel seu caràcter d'instrucció com pel seu àmbit limitat al ministeri i als organismes públics i entitats que s'hi adscriuen, ha de valorar-se positivament la seva adopció en la mesura que pot contribuir a una millor aplicació de la Llei 27/2006, de 18 de juliol, pel que fa a l'accés a la informació ambiental. En aquesta instrucció poden trobar-se pautes interpretatives i aplicables amb relació a temes tan rellevants com el concepte d'informació ambiental, el públic com a sol·licitant d'informació, la coordinació entre unitats, la forma o format de la informació subministrada, el règim de contraprestació pel dret a la informació ambiental o les excepcions a l'obligació de facilitar la informació ambiental. D'especial interès resulta l'annex d'aquesta instrucció, que recull aclariments i criteris jurisprudencials relatius a les excepcions a l'obligació de facilitar informació ambiental, que poden contribuir en gran manera a una millor aplicació, i evitar l'aplicació abusiva.

1.7. Novetats de caràcter organitzatiu

En matèria organitzativa, destaca, en primer lloc, l'aprovació del Reial decret 776/2012, de 4 de maig, pel qual es modifica el Reial decret 2355/2004, de 23 de desembre, pel qual es regulen l'estructura i les funcions del Consell Assessor de Medi Ambient. Es tracta d'una modificació menor en la composició d'aquest òrgan col·legiat, de participació i seguiment de les polítiques ambientals generals orientades al desenvolupament sostenible, a fi d'adequar-la a les modificacions operades en virtut del Reial decret 1823/2011, de 21 de desembre, pel qual es reestructuren els departaments ministerials, el Reial decret 1887/2011, de 30 de desembre, pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials, i el Reial decret 401/2012, de 17 de febrer, pel qual es desplega l'estructura orgànica bàsica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient. Concretament, es modifica l'article 3.2 i es preveu que ha d'actuar com a suplent del president el secretari d'estat de Medi Ambient —anteriorment, era el subsecretari de Medi Ambient.

En segon lloc, es crea la Comissió Interministerial d'Estratègies Marines, òrgan col·legiat amb competències decisòries que s'adscriu al Ministeri d'Agricultura,

Alimentació i Medi Ambient, i que té com a funció coordinar l'elaboració, l'aplicació i el seguiment de la planificació del medi marí. Quant a la composició, aquesta Comissió està integrada pel president (el titular de la Secretaria d'Estat de Medi Ambient del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient), el vicepresident (el titular de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar del Ministeri esmentat), uns quants vocals (dos representants, amb rang mínim de director general o assimilat de cada un dels següents departaments ministerials: Ministeri de Foment, Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, Ministeri d'Economia i Competitivitat i Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient; i un representant, amb rang mínim de director general o assimilat, de cada un dels següents departaments ministerials: Ministeri de Defensa, Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació, Ministeri de l'Interior, Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques, Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat) i el secretari (el titular de la Divisió per a la Protecció del Mar de la Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar). També poden incorporar-se a la Comissió, en funció del contingut de les matèries que s'han de tractar i, a invitació de la Presidència, representants d'altres òrgans de l'Administració General de l'Estat, així com experts en aquestes matèries perquè, amb veu però sense vot, col·laborin en la Comissió i l'assessorin. Entre les funcions de la Comissió Interministerial d'Estratègies Marines es troben l'anàlisi i l'avaluació de la informació relacionada amb el medi marí que els departaments ministerials integrats en la Comissió puguin aportar per contribuir a l'elaboració, l'aplicació i el seguiment de les estratègies marines; l'intercanvi d'informació sobre instal·lacions, projectes i plans sectorials que estiguin ubicats, que afectin o que es prevegin en el medi marí, a fi d'assegurar-ne la coherència amb l'estratègia marina que s'aprovi per a cada demarcació; l'anàlisi dels diversos components de les estratègies marines elaborats pel Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, així com la coordinació de la participació dels departaments ministerials integrats en la Comissió en l'avaluació inicial de l'estat del medi marí, la definició del seu bon estat ambiental, la identificació d'objectius ambientals, l'establiment de programes de seguiment i la posada en marxa de programes de mesures, així com en l'actualització de les estratègies marines; el seguiment de les estratègies marines i de les actuacions que els diferents departaments ministerials duguin a terme en compliment de les mateixes; i qualsevol altra funció que, en el marc de les seves competències, se li atribueixi per disposició legal o reglamentària.

Finalment, mitjançant l'Ordre AAA/1745/2012, de 26 de juliol, s'ha creat la Comissió Ministerial de Seguiment i Coordinació d'Ajudes del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i dels seus organismes públics i entitats vinculades o dependents, adscrita a la Subsecretaria del Departament, com a òrgan col·legiat encarregat de garantir la millor política de foment del Departament i dels seus organismes públics.

1.8. Altres normes d'interès

En l'àmbit internacional, cal destacar l'entrada en vigor de l'acord entre el Regne d'Espanya i el Principat d'Andorra sobre el trasllat de residus, fet a Madrid el 29 de novembre de 2011, que té com a objecte regular el trasllat de residus entre ambdós estats[51]; i la publicació de l'acord entre el Govern del Regne d'Espanya i el Govern de la República Francesa en l'àmbit de les situacions d'emergència i de protecció i seguretat civils, fet a Madrid el 28 d'abril de 2009, que ha entrat en vigor el 25 d'agost de 2012[52].

També cal esmentar el Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis[53], que té com a objecte l'impuls i la dinamització de l'activitat comercial detallista i de determinats serveis mitjançant l'eliminació de càrregues i restriccions administratives existents que afecten l'inici i exercici de l'activitat comercial, en particular, mitjançant la supressió de les llicències d'àmbit municipal vinculades amb els establiments comercials, les seves instal·lacions i determinades obres prèvies. La intervenció local sobre les activitats ja havia estat objecte prèviament de diferents reformes de què s'ha donat compte en cròniques anteriors, a fi de reduir càrregues administratives i llicències. Així, la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar-les a la llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici, va modificar l'article 84 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de la llei de bases del règim local, a fi de sotmetre els actes de control preventiu d'àmbit municipal als seus principis quan es tracti de l'accés i exercici d'activitats de serveis. Posteriorment, la Llei 2/2011, de 4 de març, d'economia

[51] Vid. el BOE núm. 157, de 2 de juliol de 2012.

[52] Vid. el BOE núm. 219, d'11 de setembre de 2012.

[53] Vid. també la Resolució de 14 de juny de 2012, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'acord de convalidació del Reial decret llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (BOE núm. 148, de 21 de juny de 2012).

sostenible, va incorporar a l'esmentada Llei 7/1985, els articles 84 bis i 84 ter, que establia amb caràcter general la inexigibilitat de llicència o altres mitjans de control preventius per a l'exercici d'activitats, llevat que afectés la protecció del medi ambient o del patrimoni historicoartístic, la seguretat o la salut públiques, o que impliquen l'ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic, i condicionant, en tot cas, l'exigibilitat de la llicència a un judici de necessitat i proporcionalitat. Ara, el Reial decret llei 19/2012 fa un pas més en l'impuls de reducció de càrregues i llicències en l'àmbit del comerç detallista, i elimina tots els supòsits d'autorització o llicència municipal prèvia per a les activitats comercials detallistes i la prestació de determinats serveis previstos en l'annex d'aquest reial decret llei, realitzats a través d'establiments permanents, situats en qualsevol part del territori nacional, i la superfície útil de exposició i venda al públic de la qual no sigui superior a 300 metres quadrats[54]. És més, la flexibilització va més enllà de la Llei 2/2011 i afecta també totes les obres lligades al condicionament d'aquests locals, i no és exigible la llicència o l'autorització prèvia per a la realització de les obres lligades al condicionament dels locals per exercir l'activitat comercial quan no requereixin la redacció d'un projecte d'obra de conformitat amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació. Per a aquestes activitats, les llicències han de ser substituïdes per declaracions responsables o per comunicacions prèvies, relatives al compliment de les previsions legals establertes en la normativa vigent; i, en tot cas, el declarant ha d'estar en possessió del justificant de pagament del tribut corresponent quan sigui preceptiu. D'aquesta manera, per a aquest tipus d'establiments ja no podran argüir-se raons de protecció ambiental per justificar el manteniment de la llicència. Com es posa de manifest en el preàmbul, "Mitjançant aquest reial decret llei s'avança un pas més eliminant tots els supòsits d'autorització o llicència municipal prèvia, motivats en la protecció del medi ambient, de la seguretat o de la salut públiques, lligats a establiments comercials i altres que es detallen a l'annex amb una superfície de fins a 300 metres quadrats. Es considera, després de realitzar el judici de necessitat i proporcionalitat, que no són necessaris controls previs ja que es tracta d'activitats que, per la seva naturalesa, per les instal·lacions que requereixen i per la dimensió de l'establiment, no tenen un impacte susceptible de control a través de la tècnica

[54] D'acord amb l'article 2.2 d'aquest reial decret llei "Queden al marge de la regulació que conté el títol I d'aquest Reial decret llei les activitats que es porten a terme en els dits establiments que tinguin impacte en el patrimoni historicoartístic o en l'ús privatiu i ocupació dels béns de domini públic".

autoritzadora, la qual es substitueix per un règim de control ex post basat en una declaració responsable".

Finalment, cal destacar l'aprovació d'altres normes d'interès, com el Reial decret llei 25/2012, de 7 de setembre, pel qual s'aproven mesures urgents per pal·liar els danys produïts pels incendis forestals i altres catàstrofes naturals que han ocorregut en diverses comunitats autònomes; el Reial decret 1070/2012, de 13 de juliol, pel qual s'aprova el Pla Estatal de Protecció Civil davant del risc químic, dictat a l'empara del que disposa l'article 149.1.29 CE, que atribueix a l'Estat la competència exclusiva sobre seguretat pública; i l'Ordre PRE/1665/2012, de 19 de juliol, per la qual es modifica l'annex III del Reial decret 227/2006, de 24 de febrer, pel qual es complementa el règim jurídic sobre la limitació de les emissions de compostos orgànics volàtils en determinades pintures i vernissos i en productes de renovació de l'acabat de vehicles.

2. Dret i polítiques ambientals autonòmiques

L'activitat normativa autonòmica en matèria ambiental en el període objecte d'anàlisi ha estat pràcticament inexistent, si es compara amb altres semestres anteriors. El context de crisi i la difícil situació econòmica a què s'enfronta Catalunya, lligada a la convocatòria anticipada d'eleccions al Parlament de Catalunya i la seva dissolució —mitjançant el Decret del president de la Generalitat de Catalunya 104/2012, d'1 d'octubre— i a un nou escenari polític, han relegat les qüestions ambientals en un segon pla, almenys des del vessant normatiu. En efecte, ha estat un semestre pobre en novetats normatives. En aquests mesos no s'ha aprovat cap norma amb rang de llei en matèria ambiental —si exceptuem, perquè no és estrictament ambiental, la Llei 8/2012, de 25 de juny, de modificació dels límits i la denominació de la reserva nacional de caça de l'Alt Pallars—, i les normes més destacables són les referides a l'activitat de foment, que en gran manera s'ha mantingut malgrat la situació de crisi econòmica actual; i alguna de caràcter organitzatiu.

En canvi, sí que hi ha una ressenya digna d'esmentar des del punt de vista de les iniciatives i actuacions d'interès polític. Ens referim a l'aprovació per part del Govern català del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020.

2.1. L'escassa activitat normativa autonòmica

Com hem avançat, en aquests últims mesos l'activitat normativa autonòmica ha estat certament escassa i limitada a normes de caràcter reglamentari. Les novetats en aquest període són poques. A part de les nombroses ordres departamentals per aprovar les bases reguladores i la convocatòria d'ajudes i subvencions amb finalitats d'interès ambiental[55], únicament cal destacar el Decret 101/2012, de 25 de setembre, mitjançant el qual es modifica el Decret 160/2010, de 9 de novembre, de regulació del premi Ramon Margalef d'Ecologia; i l'Ordre TES/265/2012, de 30 d'agost, de modificació de l'Ordre MAH/463/2005, de 25 de novembre, per la qual es crea la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre i se'n regulen la composició i la funció, a fi d'adaptar aquest òrgan consultiu, assessor, de concertació i participació, a la nova estructura administrativa de la Generalitat.

També podem esmentar l'Ordre AAM/111/2012, de 25 d'abril, per la qual es fa pública la relació de les taxes vigents corresponents als procediments tramitats pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural; l'Ordre AAM/206/2012, de 29 de juny, per la qual s'aproven els preus públics per a la prestació de serveis en els espais naturals de protecció especial; i l'Ordre AAM/254/2012, de 31 d'agost, d'aprovació del Pla Pilot de Recol·lecció de Bolets dins de l'àmbit del paratge natural d'interès nacional de Poblet i de la seva zona d'influència, i de creació del preu públic vinculat al pla pilot.

En un altre ordre de coses, en aquests mesos s'han adoptat uns quants acords de Govern interessants des la perspectiva ambiental. Entre els quals destaquem l'Acord GOV/61/2012, de 26 de juny, de renovació parcial dels membres del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible; l'Acord GOV/70/2012, de 3 de juliol, pel qual s'autoritza la reducció del capital d'Ecoparc de Residus Industrials, SA, i la modificació dels seus Estatuts; l'Acord GOV/74/2012, de 10 de juliol, mitjançant el qual es fa pública la delimitació del lloc d'importància comunitària (LIC) ES5140004 Sèquia Major, que resulta de la cinquena llista actualitzada de llocs d'importància comunitària

[55] Vid., per exemple, l'Ordre TES/152/2012, de 7 de juny, mitjançant la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions per a actuacions d'ordenació ambiental de la il·luminació exterior; l'Ordre TES/205/2012, de 3 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores generals de les subvencions per a la promoció i la consolidació de la custòdia del territori a Catalunya; l'Ordre TES/226/2012, de 13 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores de les subvencions a associacions i fundacions per al finançament d'actuacions i projectes d'educació i sensibilització ambiental; i l'Ordre AAM/147/2012, de 6 de juny, mitjançant la qual es convoquen per a l'any 2012 les ajudes a la gestió forestal sostenible per a finques de titularitat pública destinades a la gestió forestal, la recuperació del potencial forestal i prevenció d'incendis, la diversificació de l'economia rural i la transformació i la comercialització dels productes forestals.

de la Regió Biogeogràfica Mediterrània aprovada per la Comissió Europea; l'Acord GOV/81/2012, de 31 de juliol, pel qual es modifica puntualment el Programa de seguiment i control del districte de conca hidrogràfica o fluvial de Catalunya, aprovat mitjançant l'Acord GOV/128/2008, de 3 de juny; i l'Acord GOV/82/2012, de 31 de juliol, pel qual es declaren com a zona de protecció especial de l'ambient atmosfèric, pel contaminant diòxid de nitrogen, diversos municipis de les comarques del Baix Llobregat, del Vallès Occidental i del Vallès Oriental.

D'altra banda, també s'han establert els criteris ambientals per a l'atorgament del distintiu de garantia de qualitat ambiental als equipaments culturals: biblioteques i museus (Resolució TES/787/2012, de 2 d'abril), i a les matèries primeres i als productes de plàstic reciclatge (Resolució TES/788/2012, de 2 d'abril); s'ha aprovat el Quadern de normes tècniques de la producció agroalimentària ecològica (Resolució AAM/951/2012, de 15 de maig); i s'ha convocat el Premi Escoles Verdes de la Generalitat de Catalunya per a l'any 2012 (Resolució TES/1088/2012, de 17 d'abril).

2.2. El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020

Sens dubte, el més destacable en el període objecte d'anàlisi és l'aprovació, mitjançant l'Acord del Govern GOV/97/2012, de 9 d'octubre, del Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020[56], que ha ser la guia per a les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic a Catalunya.

Aquest Pla té el seu origen en el Pla de Govern 2011-2014, l'apartat 6.6 del qual establia la necessitat de dissenyar un nou model energètic equilibrat basat a garantir la qualitat del subministrament; establir un model competitiu econòmicament i amb menys dependència exterior; respectar el medi ambient, amb més pes de les energies renovables; reduir els combustibles fòssils, i millorar l'eficiència en la utilització de l'energia per arribar a un model català de generació i consum que sigui sostenible. Així mateix, l'apartat 6.4 incloïa la voluntat d'impulsar polítiques ambientals i de lluita contra el canvi climàtic com a eix transversal i vertebrador, la qual cosa suposava, entre altres aspectes, l'establiment d'un model energètic que contribuís a assolir objectius generals en matèria de reducció de gasos d'efecte d'hivernacle.

[56] Acord publicat en el DOGC núm. 6231, d'11 d'octubre de 2012.

En aquesta línia, el Pla de Govern, preveia, d'una banda, la necessitat que el Govern tramités i aprovés un nou Pla de l'Energia de Catalunya 2012-2020, que millorés la planificació energètica a Catalunya; i, d'una altra, la necessitat d'impulsar un pla de mitigació de les emissions per al període 2013-2020, d'acord amb els objectius de reducció d'emissions que estableix la Unió Europea. De la confluència d'ambdós propòsits sorgeix la voluntat d'impulsar un pla de l'energia i canvi climàtic que inclogui tant els aspectes derivats de la planificació energètica com els aspectes vinculats a les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle del cicle de l'energia.

El Pla de l'Energia i Canvi Climàtic de Catalunya 2012-2020 aborda la nova orientació que el Govern actual de la Generalitat vol donar a la política energètica catalana, que integra aspectes de la mitigació del canvi climàtic relacionats amb l'energia. Atesa l'estreta relació de l'energia amb les quatre dimensions de la sostenibilitat (econòmica, social, d'equilibri territorial i ambiental), l'objectiu és aconseguir una economia i una societat de baixa intensitat energètica i de baixa emissió de carboni, innovadora, competitiva i sostenible a mitjà i llarg termini. En aquest sentit, els objectius europeus per a l'any 2020 constitueixen un marc de referència de l'actuació de la Generalitat en matèria de política energètica i de canvi climàtic, si bé el Pla també analitza el potencial i la capacitat de reacció des de Catalunya, en el cas que la Unió Europea acordés un nou objectiu més ambiciós de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle i d'un nou repartiment d'esforços entre els estats membres.

En aquest marc, el Pla determina deu eixos estratègics de la nova política energètica catalana. Són els següents: les polítiques de desenvolupament i eficiència energètica han de ser clau per assegurar l'èxit d'un sistema energètic sostenible per a Catalunya; les energies renovables com a opció estratègica de present i de futur per a Catalunya; la política energètica catalana ha de contribuir als compromisos de l'Estat espanyol de reducció de gasos d'efecte d'hivernacle en el si de la Unió Europea; la consolidació del sector de l'energia com a oportunitat de creixement econòmic i creació d'ocupació qualificat; la millora de la seguretat i la qualitat del subministrament energètic i el desplegament de les infraestructures energètiques necessàries per assolir el nou sistema energètic de Catalunya; les polítiques energètiques i ambientals catalanes han de tenir estratègies coherents per assolir un futur sostenible per a Catalunya, integrant el desenvolupament social, econòmic i ambiental; accelerar l'impuls a l'R+D'I de noves tecnologies en l'àmbit energètic; l'actuació decidida de la Generalitat i de les restants

administracions públiques catalanes en relació amb el nou model energètic com a element exemplificador i de dinamització; portar la política energètica al màxim nivell estratègic; i la implicació de la societat civil en la construcció del nou model energètic del país: formació, informació, participació i inclusió dels sectors socials més desfavorits econòmicament.

Així mateix, estableix objectius quantitatius de l'oferta i la demanda energètica en l'horitzó de l'any 2020 i els objectius de reducció d'emissions de gasos d'efecte d'hivernacle; i estratègies singulars que es consideren necessàries per assolir aquests objectius, entre les quals es troben les relatives a l'energia eòlica, el vehicle elèctric, la sostenibilitat energètica en el sector dels edificis, les infraestructures elèctriques, l'aprofitament energètic de la biomassa forestal, la valoració energètica dels residus, la implantació d'un sector empresarial en sectors emergents en l'àmbit energètic, el nou enfocament d'actuació de l'Administració energètica catalana i les directrius per al Pla d'Emergència Energètica de Catalunya.

Finalment, també inclou la memòria econòmica, en la qual es recullen les inversions i els recursos econòmics públics associats al Pla; els recursos econòmics per al Pla provinents de les polítiques de mitigació del canvi climàtic; i les repercussions econòmiques de les polítiques propostes en el Pla.

Una de les principals novetats d'aquest Pla és la integració, des de la seva fase de disseny, de les polítiques energètiques i de mitigació del canvi climàtic. Des de la perspectiva climàtica, aquest Pla constitueix una part molt significativa de la planificació en matèria de política climàtica, però només inclou els aspectes de mitigació del canvi climàtic relatius al cicle energètic, per exemple, la producció d'electricitat, les indústries manufactureres i de construcció, el transport o els sectors residencial, comercial i institucional. No obstant això, no inclou altres aspectes del canvi climàtic, com les emissions de gasos d'efecte d'hivernacle no vinculades a l'energia, el denominat efecte engolidor (boscos, agricultura…), l'adaptació als impactes del canvi climàtic o el desplegament de models climàtics regionals que són objecte del Pla de Mitigació i l'Estratègia d'Adaptació. Precisament ara està en procés d'elaboració l'Estratègia Catalana d'Adaptació al Canvi Climàtic, horitzó 2013-2020, amb relació a la qual s'ha obert un procés participatiu.